



AMPARO EN REVISIÓN 2479/98
QUEJOSAS: RESIDENCIAS MODERNAS,
S.A. DE C.V. Y OTROS.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE
GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: LETICIA FLORES DÍAZ.

México, Distrito Federal, acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
cinco de julio de dos mil.



ORTE DE
NACION
QUERDOS DE
A SALA

VISTOS; Y
RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escritos presentados el doce de febrero de
mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de Partes del
Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, ANTONIO FERNÁNDEZ DE CASTRO
ESPINOZA, en su carácter de apoderado legal de RESIDENCIAS
MODERNAS, S.A. DE C.V. y EDUARDO SÁMANO VARGAS, en
su carácter de apoderado legal de ARRENDADORA DE
ARAGÓN, S.A. DE C.V.; de PROMOTORA DE INVERSIONES
VALLE DORADO, S.A y de DESARROLLOS METROPOL, S.A.
DE C.V., solicitaron el amparo y la protección de la Justicia de la
Unión en contra de la autoridades y por los actos que a
continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) La LIII
"Legislatura del Estado México, 2) Gobernador
"del Estado de México, 3) Secretario General de
"Gobierno del Estado de México, 4) El
"Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de
"Baz, Estado de México, 5) Presidente Municipal
"de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 6)
"Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal
"de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 7)
"Tesorero del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
"Estado de México, 8) Ayuntamiento
"Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado
"de México, 9) Presidente Municipal de Ecatepec
"de Morelos, Estado de México, 10) Síndico
"Procurador del Ayuntamiento de Ecatepec de
"Morelos, Estado de México y, 11) Tesorero
"Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de
"México.--- ACTOS RECLAMADOS: 1) De la LIII
"Legislatura del Estado de México, se reclama la
"aprobación y expedición del Decreto N. 43 de
"nueve de diciembre de mil novecientos noventa
"y siete, publicado en el Periódico Oficial del
"Gobierno del Estado de México, el día once del
"mismo mes y año, por el que se aprobó la Ley
"del Catastro del Estado de México.--- De igual
"forma, se le reclama la aprobación y expedición
"del Decreto N. 44 de nueve de diciembre de mil
"novecientos noventa y siete, por el que se



FE DE
ACION
DOS
ALA

"aprueban las Tablas de Valores Unitarios de
 "Suelo y de Construcción, publicado en el
 "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
 "México el día once del mismo mes y año.--- Se
 "reclama también la aprobación y expedición del
 "Decreto N. 49 de treinta de diciembre de mil
 "novecientos noventa y siete, publicado en el
 "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
 "México al día treinta y uno del mismo mes y
 "año, por el que se aprobaron diversas reformas
 "a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
 "México, específicamente sus artículos 1, 3, 4, 4
 "BIS, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27,
 "30 y Tercero Transitorio del Decreto, en los que
 "se establecen las disposiciones relativas al
 "Impuesto Predial.--- 2) Del Gobernador del
 "Estado de México, se reclama la promulgación,
 "publicación y ejecución del decreto N. 43 de
 "nueve de diciembre de mil novecientos noventa
 "y siete, publicado en el Periódico Oficial del
 "Gobierno del Estado de México el día once del
 "mismo mes y año, por el que se aprobó La Ley
 "del Catastro del Estado de México.--- De igual
 "forma, se reclama la aprobación, expedición del
 "Decreto N. 44 de nueve de diciembre de mil
 "novecientos noventa y siete, por el que se
 "aprueban las tablas de valores unitarios de
 "suelo y de construcción, publicado en el
 "Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

"México, el día once del mismo mes y año.--- Se
 "le reclama también la promulgación,
 "publicación y ejecución del Decreto N. 49 de
 "treinta de diciembre de mil novecientos noventa
 "y siete, publicado en el Periódico Oficial del
 "Gobierno del Estado de México el día treinta y
 "uno del mismo mes y año, por el que se
 "aprobaron diversas reformas a la Ley de
 "Hacienda Municipal del Estado de México,
 "específicamente en sus artículos 1, 3, 4, 4 bis,
 "7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30 y
 "Tercero Transitorio del Decreto, en los que se
 "establecen las disposiciones relativas al
 "Impuesto Predial.--- 3) Del Secretario General
 "de Gobierno del Estado de México, se reclama
 "el refrendo y publicación de los Decretos Nos.
 "43, 44 y 49 relacionados en el punto anterior.---
 "4) Del Ayuntamiento Constitucional, Presidente
 "Municipal, Síndico Procurador, Tesorero, todos
 "de los Municipios de Ecatepec de Morelos y
 "Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en su
 "carácter de autoridades fiscales ejecutoras, se
 "reclama la aplicación de los Decretos
 "mencionados; la pretensión de la
 "determinación, liquidación y cobro del Impuesto
 "Predial para 1998 y años posteriores, así como
 "todo acto de fiscalización, inspección, vigilancia
 "y sanción relacionado con la citada
 "contribución.--- 5) De todas y cada una de las

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



*"autoridades aquí enlistadas como
"responsables, se reclaman las consecuencias
"que de hecho o de derecho se generen sobre mi
"representada con derivación de su pretensión
"por aplicarle todas o parte de las disposiciones
"impugnadas en esta demanda de amparo."*

*/SEGUNDO.- Como antecedentes, la parte quejosas expresó
en su demanda de amparo los que a continuación se transcriben:*

"ANTECEDENTES

*"1.- Con fecha once y treinta y uno de diciembre de
"mil novecientos noventa y siete fueron publicados
"en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de
"México los Decretos N.43, 44 y 49 por los que se
"aprobaron, respectivamente, la Ley de Catastro
"del Estado de México, las Tablas de Valores
"Unitarios de Suelo y de Construcción y diversas
"reformas a la Ley de Hacienda Municipal del
"Estado de México, con el objeto de introducir un
"nuevo esquema para la determinación y cálculo
"del Impuesto Predial en el Estado de México, para
el ejercicio fiscal de 1998.- - - 2.- De conformidad
"con lo dispuesto en sus correspondientes
"artículos Segundo transitorios, la nueva Ley de
"Catastro del Estado de México y las reformas a la
"Ley de Hacienda Municipal del Estado de México
"entraron en vigor el pasado uno de enero de mil
"novecientos noventa y ocho, en tanto que en el*

FE DE
ACCIÓN
IDOS DE
SALA

"Decreto aprobatorio respectivo no se especifica la
"entrada en vigor de las Tablas de Valores
"Unitarios de Suelo y de Construcción.- - 3.- Mi
"representada ha sido y es sujeto pasivo del
"Impuesto Predial al encontrarse dentro de los
"supuestos normativos contemplados en el artículo
"2º de la Ley de Hacienda Municipal, ya que es
"propietaria de predios y de construcciones
"permanentes adheridos a ellos, ubicados dentro
"del territorio del Estado de México. Tal situación
"se acredita con el Testimonio Notarial y con los
"recibos de pago del Impuesto Predial
"correspondientes a mil novecientos noventa y
"siete, mismos que se anexan a esta demanda.- SUP
"4.- De igual forma es evidente el interés jurídico de
"mi representada, puesto que al ser sujeto del
"impuesto citado adquiere diversas obligaciones,
"siendo la más gravosa la de autodeterminar el
"impuesto y enterar su importe, situación que le
"genera un notorio menoscabo patrimonial.- - 5.-
"Finalmente, para efectos de la procedencia del
"juicio es importante establecer la naturaleza
"autoaplicativa de los ordenamientos que se
"combaten, ya que el conjunto de obligaciones
"inmediatas que se imponen a los contribuyentes
"en diversos preceptos de los textos impugnados,
"provoca afectaciones efectivas, concretas y
"actuales en su esfera, sin necesidad de que exista
"un acto posterior de aplicación."

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



TERCERO.- Las quejas, señalaron como garantías violadas las consagradas en los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, y formularon los siguientes conceptos de violación.



TE DE
NACION
ERDOS DE
BALAJ

"PRIMERO.- El contenido de los artículos 3 de la
"Ley de Hacienda del Estado de México, y 16 de
"la Ley del Catastro del Estado de México, es
"violatorio del principio de Legalidad Tributaria
"considerado en la fracción 31, fracción IV del
"artículo 31 de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos.--- La fracción IV, del
"artículo 31 de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos, establece que: (Se
"transcribe).--- En este precepto constitucional
"se plasma la garantía de legalidad en materia
"impositiva, estableciéndose y reconociéndose
"en Jurisprudencia que para que un impuesto
"sea constitucionalmente válido se requiere que
"se satisfagan tres requisitos: a) Que el impuesto
"sea establecido en leyes, tanto desde el punto
"de vista formal como material; b) Que el
"gravamen sea proporcional y equitativo; y c)
"Que el importe del impuesto se destine a cubrir
"los gastos públicos.--- Con el propósito de
"evitar excesos por parte de las autoridades
"fiscales, el Constituyente determinó que toda
"contribución debería estar prevista en una ley,
"esto es, en una disposición de naturaleza

"general, abstracta e impersonal y, lo más
 "importante, que emanara del Poder Legislativo,
 "para así garantizar que fuesen los gobernados,
 "a través de sus representantes, y no la
 "autoridad, los que estableciesen las cargas
 "tributarias.--- La exigencia de que una
 "contribución esté contemplada en una ley
 "implica no sólo que la misma se contenga
 "genéricamente en un ordenamiento de estas
 "características, sino que sus elementos
 "esenciales también estén definidos en la propia
 "norma.--- Al respecto, la Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación, se ha pronunciado a
 "través de las siguientes Jurisprudencias:
 "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE
 "LOS. DEBEN DE ESTAR CONSIGNADOS
 "EXPRESAMENTE EN LA LEY", "IMPUESTOS,
 "PRINCIPIOS DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA
 "DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".
 "(Se transcriben).--- Como se desprende de las
 "tesis anteriormente transcritas, es necesario
 "que todos los elementos básicos de una
 "contribución, así como la forma, contenido y
 "alcance de la obligación tributaria, estén
 "contenidos y precisados en una ley.--- Sin
 "embargo, al analizar el artículo 3 de la Ley de
 "Hacienda Municipal en vigor, junto con el
 "artículo 16 de la Ley de Catastro del Estado de
 "México, podemos claramente apreciar que no se

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



TE DE
NACIONAL
EDOS DE
SALA

"cumple a cabalidad con este requisito.--- Así, el
"mencionado artículo 3° establece (Se
"transcribe).--- Por su parte, el artículo 16 de la
"Ley de Catastro aludido señala que (Se
"transcribe).--- De esta forma, las disposiciones
"transcritas establecen, primeramente, que hay
"tres bases distintas para el cálculo del
"impuesto: (Se transcriben).--- El que se aplican
"ciertas bases, dependerá entonces de que los
"predios se ubiquen dentro o fuera de las áreas
"urbanas de interés catastral, sin que se
"establezca cuales son éstas, dejándose al
"arbitrio de la autoridad fiscal la facultad de
"definirlas.--- El elemento vinculatorio para la
"aplicación de una u otra base es el que un
"predio se encuentre dentro o fuera del área
"urbana de interés catastral y, por tanto, es
"componente indisoluble de la base, debiéndose
"entonces obligadamente estar definido y
"precisado en la ley.--- Resulta innegable que el
"artículo 16 de la Ley de Catastro deja en la
"autoridad la decisión de definir a las áreas
"urbanas de interés catastral, ya que establece
"que estas son delimitaciones territoriales, con o
"sin traza urbana, definidas por las autoridades
"catastrales dentro del territorio de un
"municipio.--- Es tan evidente que la ley deja al
"arbitrio de la autoridad la delimitación de estas
"áreas y, por consiguiente, la posibilidad de que

"dichas autoridades puedan aplicar
 "caprichosamente una base u otra a los
 "contribuyentes, que la misma señala que las
 "citadas áreas urbanas de interés catastral
 "definidas como tales por la autoridad.--- Resulta
 "entonces que, no obstante un predio se
 "encuentre en una delimitación territorial que
 "carece de traza urbana, la autoridad puede
 "establecer que se trata de un área urbana de
 "interés catastral.--- Es notorio que la exigencia
 "de que los elementos esenciales de los tributos
 "estén contemplados en ley estriba en que es
 "indispensable que el particular conozca la
 "forma cierta de contribuir, el supuesto en que
 "se ubica, el porqué de la ubicación en
 "determinada base.--- La posibilidad de que la
 "autoridad pueda arbitrariamente modificar el
 "elemento vinculativo de la base atenta
 "abiertamente contra el principio de legalidad
 "tributaria.--- Este principio se traduce así en
 "obligatoriedad de que el contribuyente tenga
 "certeza jurídica, que conozca la razón por la
 "cual se le aplican determinadas bases, esos
 "datos cuantificables sobre los que se va a
 "determinar el monto del impuesto, ya que de no
 "ser de esta forma se encontrará a merced del
 "recaudador.--- Conforme a las disposiciones
 "analizadas, la autoridad puede caprichosamente
 "incluir o excluir un predio de un área urbana de

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



PARTE DE
 VACIONE
 RDOS DE
 SALA

"interés catastral y, por consiguiente, determinar
 "que un contribuyente pague montos de
 "impuestos totalmente disparejos, dependiendo
 "de la base en que lo coloque.- - - SEGUNDO.-
 "LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 4º Y TERCERO
 "TRANSITORIO DE LA LEY DE HACIENDA
 "MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SON
 "VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS DE
 "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
 "CONSAGRADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL
 "ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
 "DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- - -
 "Como ya se apuntó en el concepto de violación
 "anterior, otro requisito de validez constitucional
 "de un impuesto es que este sea proporcional y
 "equitativo. La justicia tributaria implícita en
 "estos principios, exige que los gobernados
 "deben contribuir en función de su capacidad
 "contributiva y que todos aquellos que se
 "encuentran dentro de la hipótesis de causación,
 "deben pagar el tributo. La proporcionalidad de
 "un impuesto está condicionada a la existencia
 "de una correspondencia entre el monto a pagar
 "y la posición del obligado frente al objeto
 "gravado, y la equidad a que se guarde una
 "situación de igualdad frente a la norma jurídica
 "que establece y regula la contribución.- - -
 "También sobre la conceptualización de estos
 "principios La Corte se ha manifestado a través

"de la siguiente tesis jurisprudencial: - - -
 "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON
 "REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA CON
 "LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES
 "FISCALES." (Se transcribe). - - - En oposición a
 "estos principios encontramos la mecánica
 "contemplada en los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley
 "de Hacienda Municipal del Estado de México. El
 "artículo 1° establece que "el objeto de este
 "impuesto es la propiedad o posesión de predios
 "y las construcciones permanentes adheridas a
 "ellos, que se ubiquen dentro del territorio del
 "municipio". - - - Por su parte el artículo 3° señala
 "que "será base para la determinación del
 "Impuesto Predial:" (Se transcribe). - - - El artículo
 "4° establece que (Se transcribe). - - - Analizando
 "los artículos 1° y 3° transitorios, podemos
 "sostener que la mecánica del establecimiento
 "de bases diferenciadas del impuesto viola
 "flagrantemente el principio de proporcionalidad,
 "ya que dicha diferenciación no atiende al hecho
 "generador del tributo. En efecto, el objeto del
 "impuesto es la propiedad o posesión de predios
 "y las construcciones permanentes adheridos a
 "ellos, por lo que no resulta proporcionado el
 "que se establezcan bases diferentes cuando el
 "hecho generador del tributo es el mismo. - - - Si
 "nos damos cuenta, el establecimiento de bases
 "diferentes no atiende al hecho generador del



TE DE
ACION
RDOS DE
SALA

"impuesto, y no resulta permisible, a la luz de
 "este principio, aceptar que en unos casos, la
 "base gravable sea el valor catastral, en otros el
 "importe del impuesto pagado en el año anterior,
 "y en otros más los metros cuadrados de terreno
 "y de construcción, siendo que el objeto del
 "tributo (la propiedad o posesión de predios) es
 "el mismo en los tres supuestos. Si la base es el
 "elemento cuantificable sobre el que se va a
 "determinar el monto del impuesto, ésta debe ser
 "la misma frente a un mismo hecho generador, y
 "ya será al momento de aplicación de las cuotas
 "cuando se traduzca la carga impositiva
 "diferenciada en función de la capacidad
 "contributiva del sujeto (en este caso, en función
 "de la solvencia patrimonial derivada de la
 "propiedad del bien) - - Puntualizando: si el
 "hecho generador del crédito fiscal (la propiedad
 "o posesión de inmuebles) es el mismo como tal
 "en cuanto al derecho real que deriva o al signo
 "de riqueza que representa, no hay justicia
 "tributaria si en unos casos la base gravable es
 "el valor catastral de los inmuebles, en otros el
 "importe del impuesto cubierto el año anterior y,
 "en otros más, los metros cuadrados de terreno
 "y de construcción. Es evidente que no hay
 "equidad en cuanto que no hay tratamiento
 "idéntico frente a la misma hipótesis de
 "causación.- - - Con el propósito de ilustrar la

"manifestación económica de la
"desproporcionalidad e inequidad que se
"presentan al aplicar el esquema contemplado en
"los artículos 3° y 4° de la Ley de Hacienda
"Municipal, ofrecemos el ejemplo siguiente, que
"corresponde a uno de los inmuebles: - - - a)
"Datos base tomados para el ejemplo: - - - Clave
"catastral [REDACTED] - - - M2 de terreno:
"28,159.33 - - - M2 de construcción: 9,425.00 - - -
"Impuesto Predial cubierto en 1997: [REDACTED] - -
"- Valor Catastral estimado conforme a las tablas
"de valor vigentes: [REDACTED] - - - b)
"Impuesto Predial a cubrir considerando la base
"contemplada en la fracción I del artículo 3° (para
"los predios ubicados dentro de áreas urbanas
"de interés catastral) y aplicando la tarifa que le
"corresponde de acuerdo con la fracción I del
"artículo 4°: - - - [REDACTED] - - - c) Impuesto
"Predial a cubrir considerando la base
"contemplada en la fracción II del artículo 3°
"(para los predios ubicados fuera de áreas
"urbanas de interés catastral) y aplicando la
"tarifa que le corresponde de acuerdo con la
"fracción II del artículo 4° y el factor (1.12) a que
"nos remite dicha fracción contenido en el
"artículo 11 de la Ley de Ingresos de los
"Municipios del Estado de México para el
"Ejercicio Fiscal de 1998: - - - [REDACTED] - - - d)
"Impuesto Predial a cubrir considerando la base

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



CORTE DE
UNACION
GUARDOS Y
A SALI

"contemplada en la fracción III del artículo 3°
 "(para los predios ubicados fuera de áreas
 "urbanas de interés catastral, cuya obligación de
 "pago se genere por primera vez en 1998) y
 "aplicando la tarifa que le corresponde de
 "acuerdo con la fracción III del artículo 4°, con la
 "limitante de noventa días de salario
 "contemplada en el quinto párrafo de dicho
 "artículo): - - - [REDACTED] - - - De este ejercicio
 "real se pueden extraer las siguientes
 "conclusiones: a) Entre predios que tuviesen la
 "misma superficie, el mismo valor, que fuesen
 "colindantes, ubicados ambos fuera de un área
 "urbana de interés catastral, habría una gran
 "diferencia entre el impuesto a pagar [REDACTED]
 "y [REDACTED] por la simple razón de que en uno
 "ya se era contribuyente del Impuesto Predial y
 "de que en el otro la obligación de pago se
 "genere por primera vez. - - - b) No hay una base
 "lógica, coherente, equitativa y proporcional a un
 "indicador, que justifique que, dependiendo de
 "que un predio se encuentre dentro o fuera de
 "una área urbana de interés catastral, se paguen
 "montos de impuesto tan abismalmente
 "polarizados [REDACTED] más de
 "un 3,000% -tres mil por ciento- de diferencia). - - -
 "c) Así pues, de acuerdo con lo razonado en el
 "primer concepto de violación, no se respeta el
 "principio de legalidad y certidumbre, ya que el

"contribuyente está impedido para conocer el
 "por qué hay importes a cubrir tan
 "desproporcionados, siendo en todos ellos el
 "mismo hecho generador del impuesto. - - - Si la
 "base fuese la misma (el valor catastral de los
 "inmuebles, por ejemplo) es claro que la carga
 "tributaria sería equitativa, ya sea que un predio
 "se encuentre en una área urbana de interés
 "catastral o fuera de ella, puesto que dicho valor
 "será diferente dependiendo de su ubicación y,
 "por lo mismo, el importe a pagar será distinto,
 "dependiendo en este caso sí de la capacidad
 "contributiva (el impacto patrimonial del bien), en
 "tanto que conforme a la estructura que se <sup>SE
 JUST.
 RESE:
 RA</sup>
 "impugna la variedad de bases no responde a tal
 "capacidad. Con el esquema vigente el importe
 "del impuesto a pagar no tiene relación estrecha
 "con el peso patrimonial de la propiedad, puesto
 "que la aplicación de una base totalmente
 "diferente de otra (el importe pagado el año
 "anterior, en relación con el valor catastral) no
 "garantiza el entero proporcionado de un tributo
 "y sí en cambio polariza sin sustento alguno las
 "cargas tributarias de los sujetos que se
 "encuentran frente al mismo hecho generador
 "del impuesto: la propiedad o posesión de
 "inmuebles. - - - La ausencia de justicia tributaria
 "también se manifiesta abiertamente en el
 "esquema que, para el pago del Impuesto Predial



RTE DE
NACIONES
JERARQUÍA
SALA I

"en 1998, introduce el artículo Tercero
 "Transitorio del Decreto por el que se Reforma la
 "Ley de Hacienda Municipal del Estado de
 "México. Dicha disposición establece lo
 "siguiente: (Se transcribe) - - - Como se aprecia,
 "se presentan las siguientes injusticias: - - - a) A
 "contribuyentes que se incorporen en 1998, se
 "les aplica, sin matiz alguno, la mecánica
 "contemplada en el artículo 4º, fracción I de la
 "Ley de Hacienda Municipal. - - - b) A quienes ya
 "han venido tributando, se les aplica una
 "mecánica diferente, sin que existan condiciones
 "que la justifiquen, y que en sí misma guarda
 "otra inequidad: - - - b.1.- Si de aplicarse la
 "mecánica del artículo 4º, fracción I resulta un
 "importe mayor al cubierto en 1997, entonces se
 "adicionará a éste una tercera parte de la
 "diferencia. - - - b.2.- Pero si de tal aplicación
 "resulta que el importe a pagar en 1998 es menor
 "al que se cubrió en 1997, entonces simple y
 "llanamente se debe enterar el importe cubierto
 "en 1997, sin disminución alguna. - - - ¿Es este
 "esquema un modelo tributario que procura la
 "certidumbre, equidad y justicia fiscal, o es un
 "modelo que procura exclusivamente la
 "recaudación hacendaria, sin considerar los
 "derechos fundamentales del particular?. - - -
 "TERCERO.- EL DECRETO N.44, EN EL QUE SE
 "CONTIENE LAS TABLAS DE VALORES, ES

"VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA
 "CONSAGRADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO
 "DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.- - - El
 "segundo párrafo del artículo 14 constitucional
 "establece que "Nadie puede ser privado de la
 "vida, de la libertad o de sus propiedades,
 "posesiones o derechos, sino mediante juicio
 "seguido ante los tribunales previamente
 "establecidos, en el que se cumplan las
 "formalidades esenciales del procedimiento y
 "conforme a las leyes expedidas con anterioridad
 "al hecho".- - - Tanto la doctrina como la
 "jurisprudencia han establecido que en este
 "segundo párrafo se consagra la garantía de
 "audiencia, misma que está integrada por cuatro
 "garantías específicas de seguridad jurídica, a
 "saber: - - - a) Que haya un juicio previo a todo
 "acto de privación emanado de autoridad. - - - b)
 "Que dicho juicio o proceso se siga ante
 "tribunales previamente establecidos. - - - c) Que
 "en el juicio se sigan las formalidades esenciales
 "del procedimiento. - - - d) Que la resolución del
 "mismo se emita conforme a leyes vigentes
 "expedidas con anterioridad a la causa que lo
 "originó. - - - También se ha establecido que
 "estas exigencias no se circunscriben
 "exclusivamente a procesos formalmente
 "jurisdiccionales, sino que también están
 "presentes en procedimientos ventilados frente a

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



TE DE
ACIONE
DOS DE
SALAZ

"autoridades administrativas, de tal forma que,
 "en este último supuesto, el gobernado tenga
 "esencialmente la oportunidad de ser oído, de
 "intervenir en el procedimiento, de aportar las
 "pruebas que considere pertinentes y de
 "formular los alegatos que a sus intereses
 "convengan. - - - Esta garantía se ha hecho
 "extensiva, igualmente, a los actos del Poder
 "Legislativo, en el sentido de que toda
 "disposición de carácter general, abstracta e
 "impersonal que emane de él, deberá contemplar
 "los procedimientos indispensables para que los
 "gobernados puedan ser oídos y puedan
 "presentar las pruebas pertinentes cuando exista
 "la posibilidad de que se vean afectados sus
 "derechos. - - - Analizando las Tablas de Valor
 "contenidas en el Decreto N.44, nos encontramos
 "que las mismas contienen los valores unitarios
 "de suelo y de construcción, indicadores que
 "darán el valor catastral, el que a su vez será
 "base para la determinación de ciertas
 "contribuciones, como el Impuesto Predial y el
 "Impuesto sobre Traslación de Dominio y otras
 "operaciones con bienes inmuebles. En la tabla
 "de valores de suelo se agrupan manzanas en
 "áreas homogéneas y bandas de valor, y se fija el
 "valor del M2 de suelo que corresponde a cada
 "manzana. En la de valores de construcción, se
 "atiende al uso (habitacional, comercial,

"industrial, etc.) y a la clase, asignándose valores
 "unitarios por M2 de edificación. - - - De esta
 "forma, la autoridad asigna arbitrariamente los
 "valores de suelo y de construcción de los
 "predios, con los consecuentes efectos legales
 "que ello conlleva, sin que se contemple
 "procedimiento alguno por el cual el particular
 "pueda ser oído y pueda aportar los elementos
 "probatorios para desvirtuar la valorización que
 "de su inmueble realizó la autoridad. Así, se le
 "niega al gobernado la garantía de audiencia
 "previa, quedando en estado de indefensión
 "frente a las determinaciones de la autoridad. - - -
 "Si el particular es privado del derecho de
 "comparecer, aportar pruebas y alegar por sus
 "intereses frente a un acto del que se derivarán
 "diversas consecuencias jurídicas, el
 "ordenamiento que contempla el acto privativo
 "debe ser declarado inconstitucional. - - -
 "CUARTO.- LAS TABLAS DE VALORES
 "APROBADAS EN EL DECRETO 44, DE FECHA
 "DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
 "NOVENTA Y SIETE, VIOLAN LA FRACCIÓN IV
 "DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL. - - -
 "Como ya se mencionó en el primer concepto de
 "violación esgrimido, para que un tributo se
 "repute como constitucional es necesario que
 "cumpla con el principio de legalidad ya
 "comentado. Para este caso, este principio se

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



RTE DE
 NACIONES
 ERDOS DE
 BALDI

"traduce en la incertidumbre jurídica que debe
 "tener el particular respecto del gravamen y la
 "forma en que se determina éste. - - - Sin
 "embargo, las tablas de valores unitarios de
 "suelo y de construcción, por las cuales se
 "determina el valor catastral de los inmuebles y,
 "por ende, el Impuesto Predial a cubrirse, no se
 "apegan a esta exigencia. - - - En efecto, en
 "dichas tablas se consignan los valores unitarios
 "de suelo por M2, en función del Municipio, zona
 "catastral y manzana de ubicación del predio, sin
 "que en sección alguna de las mismas se
 "establezca el procedimiento concreto que siguió
 "la autoridad para llegar a determinar los valores
 "de suelo. - - - Esto es, la disposición en comento
 "no detalla los elementos, cálculos o peritajes en
 "que se basó para llegar a estimar los valores
 "unitarios de suelo, lo que imposibilita al
 "particular a conocer dichos elementos y
 "procedimientos y, por tanto, en caso de estimar
 "que no corresponden al valor real, a
 "combatirlos, dejándolo en total estado de
 "indefensión, puesto que carece de los datos
 "necesarios para cuestionar el proceder de la
 "autoridad, de considerar que el mismo es
 "incorrecto o no se apega a la realidad fáctica de
 "su inmueble. Reiterando, si el gobernado
 "desconoce los cálculos, operaciones y datos
 "utilizados por la autoridad para determinar el

*"valor del suelo y de la construcción aplicable a
"su inmueble, no puede saber si tales cálculos
"son los adecuados para arribar a los valores
"fijados, ni si se basaron en datos reales sobre
"los valores inmobiliarios de la zona y sobre los
"materiales utilizados en la construcción,
"estando imposibilitado por tanto para refutar, en
"su caso, los valores impuestos por la autoridad,
"puesto que, por una parte, ignora los cálculos y
"datos utilizados y, por la otra, no se contempla
"mecanismo alguno a través del cual pueda
"oponerse a los valores fijados, encontrándose
"por ende en franco estado de indefensión, al
"violentarse los principios de certidumbre y de
"previa audiencia."*

SE
SECRETARÍA
DE FISCALÍA

CUARTO.- Previa aclaración, por auto de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, admitió la demanda de garantía, la cual quedó registrada con el número 151/98 y, en esa misma fecha, el a quo ordenó de oficio, la acumulación de las demanda de garantías, promovidas por EDUARDO SÁMANO VARGAS, como apoderado legal de ARRENDADORA DE ARAGÓN, S.A. DE C.V.; PROMOTORA DE INVERSIONES VALLE DORADO, S.A. y de DESARROLLOS METROPOL, S.A. DE C.V., las cuales quedaron registradas con los números de los diversos juicios 152/98 y 153/98, al citado 151/98.

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Previos los trámites de ley, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Juez de Distrito, dictó sentencia la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- En términos del considerando
"segundo se SOBREESE EN EL PRESENTE
"JUICIO DE GARANTÍAS 151/98 y sus
"acumulados 152/98 y 153/98, que promovieron
"ANTONIO FERNÁNDEZ DE CASTRO ESPINOZA,
"en su carácter de Apoderado Legal de
"RESIDENCIAS MODERNAS, S.A. DE C.V. y
"EDUARDO SÁMANO VARGAS, en su carácter de
"Apoderado Legal de ARRENDADORA DE
"ARAGÓN, S.A. DE C.V., y de PROMOTORA DE
"INVERSIONES VALLE DORADO, S.A. y de
"DESARROLLOS METROPOL, S.A DE C.V.--
"SEGUNDO.- Con la salvedad apuntada y por los
"motivos expuestos en el considerando quinto,
"la justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a
"las directamente quejas, RESIDENCIAS
"MODERNAS S.A. DE C.V., ARRENDADORA DE
"ARAGÓN, S.A. DE C.V., PROMOTORA DE
"INVERSIONES VALLE DORADO, S.A. y
"DESARROLLOS METROPOL, S.A DE C.V., que
"acudieron al presente juicio de amparo por
"conducto de sus apoderados legales ANTONIO
"FERNÁNDEZ DE CASTRO ESPINOZA y
"EDUARDO SÁMANO VARGAS, contra actos de

TE DE
LACION
RDOS E
SALA

**"las autoridades precisadas en el considerando
"tercero de la presente sentencia."**

Dicha sentencia, se apoya fundamentalmente en las siguientes consideraciones:

**"SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional,
"Presidente Municipal, Síndico Procurador y
"Tesorero Municipal, todos de Tlalnepantla de
"Baz, Estado de México; y el Tesorero Municipal
"de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al
"rendir sus respectivos informes con
"justificación mediante oficios DJC/470/98,
"DJC/455/98, SFP-PF-DNAU-0287798 y de fecha
"veintisiete de febrero pasado NIEGAN la
"existencia de los actos que se les atribuyen.---
"Por otra parte, no obstante que no se corrió
"traslado a las siguientes autoridades señaladas
"como responsables: Ayuntamiento
"Constitucional, Presidente Municipal y Síndico
"Procurador, todos de Ecatepec de Morelos,
"Estado de México, las cuales por tal motivo, no
"rindieron sus respectivos informes con
"justificación, resulta innecesario regularizar el
"procedimiento para ese efecto; dado que, en
"primer lugar, la negativa expresada por el
"Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento debe
"hacerse extensiva a los actos reclamados de
"estas autoridades, pues los actos que a ellas se**

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



RTE DE
NACIONES
UNIDAS DE
SALA

"les reclama, corre a cargo de autoridad diversa,
"es decir, a cargo del Tesorero Municipal, quien
"ya negó la existencia del acto; y en segundo
"lugar, porque los decretos 43, 44 y 49,
"tildados de inconstitucionales, se reclaman
"como autoaplicativos, es decir, con motivo de
"su entrada en vigor y no como heteroaplicativos
"a partir de su primer acto concreto de
"aplicación.--- Además, el Gobernador del Estado
"de México, NIEGA el acto que se le atribuye
"consistente en la ejecución de los decretos 43,
"44 y 49, señalados.--- Y por su parte, el
"Gobernador Constitucional y el Secretario
"General de Gobierno, ambos del Estado de
"México, en sus respectivos informes con
"justificación dicen que mediante el decreto 49,
"impugnado, solamente se reformaron los
"artículos 1, 3, 4, 9, y 19 y se adición al artículo 4
"Bis, de la Ley de Hacienda Municipal para el
"Estado de México; lo cual significa que respecto
"de los artículos 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
"22, 27 y 30, no hubo reforma alguna.--- En
"consecuencia, si los quejosos no aportaron
"prueba alguna para desvirtuar tales negativas,
"procede sobreseer en el presente juicio de
"garantías, respecto de los actos señalados y
"atribuidos a estas autoridades, con fundamento
"en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de
"Amparo.--- Apoya lo anterior, la tesis de

"jurisprudencia número trescientos diez,
 "publicada en la página doscientos nueve, del
 "Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
 "Semanario Judicial de la Federación de mil
 "novecientos diecisiete a mil novecientos
 "noventa y cinco, que dice: "INFORME
 "JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS
 "ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."- (Se
 "transcribe).--- TERCERO.- Son ciertos los actos
 "de la Legislatura, Gobernador Constitucional y
 "Secretario General de Gobierno, todos del
 "Estado de México, consistentes en la
 "aprobación, expedición, promulgación
 "publicación y refrendo de los decretos 43 y 44
 "de fecha nueve de diciembre de mil novecientos
 "noventa y siete, publicados en el Periódico
 "Oficial del Gobierno del Estado de México el
 "once del mismo mes y año, por el que se
 "aprobó la Ley de Catastro del Estado de México
 "y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
 "Construcción, respectivamente, y del decreto 49
 "de treinta de diciembre de mil novecientos
 "noventa y siete, publicado el treinta y uno del
 "mismo mes y año, por el que se aprobaron
 "diversas reformas a la Ley de Hacienda
 "Municipal del Estado de México,
 "específicamente sus artículos 1, 3, 4, 9, y 19 y la
 "adición al artículo 4 Bis, por el que se
 "establecen las disposiciones relativas al





TE DE
ACION
IDOS DE
ALA

"IMPUESTO PREDIAL, así lo reconocen en sus
"respectivos informes con justificación, y se
"corroboraba bajo el principio jurídico de que el
"derecho no está sujeto a prueba, en términos de
"los artículos 86 y 88 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles aplicado
"supletoriamente a la Ley de Amparo.--- Apoya lo
"anterior, la tesis sustentada por el Tribunal
"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, consultable en la página 983, Primera
"Parte del último Apéndice al Semanario Judicial
"de la Federación, bajo el tenor literal siguiente:
"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. (Se
"transcribe).--- CUARTO.- Previo a la
"transcripción y estudio de los conceptos de
"violación, sea que las partes la aleguen o no,
"debe examinarse la procedencia de la acción de
"amparo, por ser de orden preferente sobre
"aquel aspecto de acuerdo a la última parte del
"artículo 73 de la Ley de Amparo y, atento a lo
"establecido por la Jurisprudencia número 940,
"publicada a fojas 1538, de la Segunda Parte del
"Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación de 1917-1988, bajo el tenor literal
"siguiente: IMPROCEDENCIA.- (Se transcribe).---
"A.- La Legislatura, el Gobernador y el Secretario
"General de Gobierno, todos del Estado de
"México, invocan las causales de improcedencia
"contenidas en las fracciones V y VI, del artículo

"73, de la Ley de Amparo.-- Respecto de la
"fracción V, que a la letra dice: (Se transcribe).--
"Aducen que, la sola aprobación, expedición,
"promulgación, refrendo y publicación de los
"decretos números 43, 44 y 49, impugnados, no
"les causa perjuicio a las directamente
"quejosas.-- Es inoperante dicha causal de
"improcedencia, toda vez que el acto reclamado
"por las quejosas, Si les afecta en sus intereses
"jurídicos, lo cual está plenamente comprobado
"con la copia certificada de los recibos oficiales
"expedidos por la Tesorería Municipal de
"Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
"números 1330894, 1315414, 32990, 1352617
"1321785, 1311903, 1311909 y 1311908, por las
"cantidades de [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] correspondientes al pago
"por convenio del impuesto predial y pago de
"impuesto predial, por los periodos 97-1 B a 97-6
"B; 97-1 B a 97-6 B; 97-5 B a 97-6 B; 97-4 B a 97-5
"B; 97-3 B a 97-4 B; 96-4 B a 97-3 B; 96-6 B a 97-6
"B y 96-6 B a 97-6 B, respecto de las claves
"catastrales [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] de las contribuyentes PROMOTORA DE
"INVERSIONES VALLE DORADO, con domicilio

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"en [REDACTED]
[REDACTED] PROMOTORA DE INVERSIONES VALLE
"DORADO, con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] INMOBILIARIA
"LOMAS DE TLALNEPANTLA, con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] INMOBILIARIA LOMAS DE
"TLALNEPANTLA, con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]
"INMOBILIARIA LOMAS DE TLALNEPANTLA, con
"domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] INMOBILIARIA LOMAS DE
"TLALNEPANTLA, con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] RESIDENCIAS
"MODERNAS, S.A., con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] Y RESIDENCIAS
"MODERNAS, S.A., con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] Así como con los recibos
"oficiales expedidos por la Tesorería Municipal
"de Ecatepec de Morelos, Estado de México,
"números 153345, 154260 y 154929,
"correspondientes al pago del impuesto predial,
"por los periodos de Enero de 1997 a Agosto de
"1997; Septiembre de 1997 a Octubre de 1997 y
"Noviembre de 1997 a Diciembre de 1997,
"respecto de la clave catastral
[REDACTED] de la contribuyente
"ARRENDADORA DE ARAGÓN, S.A., con
"domicilio en [REDACTED]



RTE DE
NACION
JERDOS P
SALA.

--- Con la aclaración de que los recibos
"oficiales a nombre de INMOBILIARIA LOMAS DE
"TLALNEPANTLA, corresponden a los de la
"actual quejosa, DESARROLLOS METROPOL,
"S.A. DE C.V.; pues como se acredita; primero,
"con la escritura trescientos cuarenta y siete de
"catorce de abril de mil novecientos ochenta y
"seis, pasada ante la fe del Notario Público
"treinta y nueve del Distrito Judicial de
"Tlalnepantla, que mediante diverso testimonio
"notarial número once mil quinientos cincuenta y
"ocho de veintitrés de abril de mil novecientos
"cincuenta y nueve se constituyó la sociedad
"INMOBILIARIA LOMAS DE TLALNEPANTLA,
"SOCIEDAD ANÓNIMA; y segundo, el cambio de
"denominación de dicha sociedad por el de
"DESARROLLOS COMERCIALES PERINORTE,
"S.A. y, con el primer testimonio notarial
"número diecinueve mil ciento setenta de
"veintiocho de octubre de mil novecientos
"noventa y siete, pasado ante la fe del Notario
"Público número 39 del Distrito Judicial de
"Tlalnepantla, se acredita la fusión de
"sociedades que celebran por una parte
"DESARROLLOS METROPOL, S.A. DE C.V., en
"su carácter de fusionante y de otra parte,
"DESARROLLOS COMERCIALES PERINORTE,
"S.A. en su carácter de fusionada.--- Recibos
"oficiales con los que se acredita de manera

SEP
FUS
REG
I. A.



CORTE DE
NACIÓN
JUEZES DE
SALA

"fehaciente que las hoy quejas, RESIDENCIAS
"MODERNAS, S.A. DE C.V., ARRENDADORA DE
"ARAGÓN, S.A. DE C.V., PROMOTORA DE
"INVERSIONES VALLE DORADO, S.A. y
"DESARROLLOS METROPOL, S.A DE C.V., son
"sujetos del pago del IMPUESTO PREDIAL, pues
"aún cuando los recibos en cita se refieren a
"pagos de dicho impuesto por el ejercicio fiscal
"de mil novecientos noventa y siete, ello
"significa, que al momento de la promulgación
"de los decretos impugnados, ya se ubicaban en
"el supuesto, es decir, las quejas,
"automáticamente quedaron comprendidas
"dentro de la hipótesis de la aplicación de los
"decretos impugnados de inconstitucionales.---
"Por ello, la manifestación de dichas
"responsables, en el sentido de que los decretos
"impugnados no les causan perjuicio, es
"inatendible, en virtud de que las quejas se
"ubican en el supuesto de la norma desde la
"fecha de entrada en vigor de los decretos
"reclamados.--- Resulta aplicable la tesis 3º.
"LXXIII/93, sustentada por la Tercera Sala de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación,
"publicada en la página 359, del Tomo XII-
"Diciembre del Semanario Judicial de la
"Federación, Octava Época, que dice: "INTERÉS
"JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LA LEY
"QUE ESTABLECE EL IMPUESTO PREDIAL CON

"MOTIVO DE SU VIGENCIA, ES SUFICIENTE
 "PARA ACREDITARLO EL RECIBO DE PAGO DE
 "DICHOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL
 "AÑO ANTERIOR."- (Se transcribe).--- Y la tesis
 "de jurisprudencia publicada bajo el número 189,
 "en la página 187 del Tomo I, Materia
 "Constitucional del Apéndice al Semanario
 "Judicial de la Federación de 1917-1995, que
 "dice: "LEY AUTOAPLICATIVA. QUIENES
 "PUEDEN IMPUGNARLA DENTRO DEL TÉRMINO
 "DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL DE SU
 "ENTRADA EN VIGOR."- (Se transcribe) ---
 "Respecto de la causal de improcedencia
 "contenida en la fracción VI, del artículo 73, ^{SUP.} ^{EST.} ^{ECRE.}
 "cita, que dice: (Se transcribe).--- Argumentan
 "que a las quejas, la sola vigencia de los
 "decretos impugnados no les causa perjuicio, ya
 "que para su impugnación se necesita de un acto
 "posterior de aplicación de esos decretos, es
 "decir, que las autoridades ejecuten dicho
 "acto.--- Lo anterior, es inoperante, dado que las
 "quejas, reclaman los decretos en cita, como
 "autoaplicativos, es decir, a partir de su entrada
 "en vigor, sin que para ello sea necesario un
 "acto posterior concreto de aplicación; por tanto,
 "si la entrada en vigor de éstos fue a partir del
 "día primero de enero de mil novecientos
 "noventa y ocho y la presentación de las
 "demandas de amparo fue el doce de febrero del

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"mismo año, a esa fecha habían transcurrido
 "veintinueve días; por tanto, están en
 "posibilidades de impugnarlos dentro de los
 "treinta días siguientes a su publicación, sin que
 "se necesite de un acto posterior de
 "aplicación.--- Al respecto resulta aplicable la
 "Jurisprudencia número 1093, visible en la
 "página 1746, Segunda Parte, del Apéndice al
 "Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,
 "que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS.
 "AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO PARA
 "INTERPONERLO."- (Se transcribe) --- En efecto,
 "de acuerdo con lo anterior, debe estimarse que
 "el acto reclamado se ubica en la primera
 "hipótesis que contempla la jurisprudencia
 "transcrita, por lo que, las quejas, actuaron
 "acertadamente al impugnar el decreto
 "controvertido dentro de los treinta días
 "siguientes a la fecha de su entrada en vigor, es
 "decir, a partir del día primero de enero de mil
 "novecientos noventa y ocho.--- Al no existir
 "diversa causal de improcedencia que las partes
 "hagan valer, ni que de oficio advierta este
 "Juzgado de Distrito, es procedente entrar al
 "estudio de fondo del asunto.--- QUINTO.- Por
 "razón de método y cronología procede analizar
 "el concepto de violación encaminado a atacar la
 "inconstitucionalidad de los artículos 3 de la Ley
 "de Hacienda Municipal y 16 de la Ley de

E D G
 CION
 JOS R
 A L A

"Catastro ambas del Estado de México,
 "reclamados; de la que en síntesis las quejas,
 "RESIDENCIAS MODERNAS, S.A. DE C.V.,
 "ARRENDADORA DE ARAGÓN, S.A. DE C.V.,
 "PROMOTORA DE INVERSIONES VALLE
 "DORADO, S.A. y DESARROLLOS METROPOL,
 "S.A DE C.V., en su primer concepto de
 "violación, manifestaron que dichos dispositivos
 "son violatorios del principio de legalidad
 "tributaria consagrado en la fracción IV del
 "artículo 31, de la Constitución Política de los
 "Estados Unidos Mexicanos.--- Pues en dicho
 "precepto constitucional se plasma la garantía
 "de legalidad en materia impositiva, dado que
 "para que un impuesto sea constitucionalmente
 "válido, se requiere que se satisfagan tres
 "requisitos: A.- Que el impuesto sea establecido
 "en leyes, tanto desde el punto de vista formal
 "como material; B.- Que el gravamen sea
 "proporcional y equitativo; y, C.- Que el importe
 "del impuesto se destine a cubrir gastos
 "públicos.--- Por ello, dicen, el Constituyente
 "determinó que toda contribución debe estar
 "prevista en ley, esto es, en una disposición de
 "naturaleza general, abstracta e impersonal y
 "que emanara del poder legislativo, para
 "garantizar que fueran los propios gobernados, a
 "través de sus representantes, y no la autoridad,
 "los que establecieran las cargas tributarias; lo

SEP
 EST
 ECR
 44

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



ORTE D
A NACIO
ACUERDOS P
LA SALA

"anterior, con el propósito de evitar excesos por
"parte de las autoridades fiscales; dado que, la
"exigencia de que una contribución esté
"contemplada en una ley implica no sólo que la
"misma se contenga genéricamente en un
"ordenamiento de estas características, sino que
"sus elementos esenciales también estén
"definidos en la propia norma.--- Es fundado el
"referido concepto de violación y suficiente para
"conceder a las quejas, el amparo y
"protección de la Justicia Federal solicitada, en
"mérito a las siguientes consideraciones y
"fundamentos legales.--- El artículo 3 de la Ley
"de Hacienda Municipal para el Estado de
"México, en vigor, establece. (Se transcribe). --- Y
"el artículo 16 de la Ley de Catastro del Estado
"de México, en vigor, establece (Se transcribe) ---
"Ahora bien, del artículo primeramente transcrito
"se desprende que son tres bases distintas para
"el cálculo de impuesto predial; la primera, dice,
"que la base para el cobro del impuesto será el
"valor catastral, TRATÁNDOSE DE INMUEBLES
"UBICADOS DENTRO DE LAS ÁREAS URBANAS
"DE INTERÉS CATASTRAL al que se le aplicará
"una reducción; la segunda, será, el monto
"pagado en el ejercicio anterior, EN EL CASO DE
"INMUEBLES UBICADOS FUERA DE LAS ÁREAS
"URBANAS DE INTERÉS CATASTRAL; y la
"tercera, será, de acuerdo a la superficie de

"terreno y de construcción, si la hubiere, PARA
 "EL CASO DE INMUEBLES UBICADOS FUERA
 "DE LAS ÁREAS URBANAS DE INTERÉS
 "CATASTRAL, CUYA OBLIGACIÓN DE PAGO SE
 "GENERE POR PRIMERA VEZ.--- De lo cual se
 "deduce, que para la aplicación de determinada
 "base para el cobro del impuesto predial,
 "dependerá de que los predios se encuentren
 "dentro o fuera de las áreas urbanas de interés
 "catastral y además, de si la obligación de pago
 "de ese impuesto se genera por primera vez; sin
 "que se establezca cuáles son estas áreas
 "urbanas de interés catastral, con lo que se deja
 "al arbitrio de la autoridad fiscal la facultad de
 "definir dichas áreas.--- Por tanto, si el elemento
 "vinculatorio para la aplicación de una u otra
 "base para el cobro del impuesto, radica en que
 "un predio se encuentre dentro o fuera de un
 "área urbana de interés catastral y además, de si
 "la obligación de pago de ese impuesto se
 "genera por primera vez, lo cual es componente
 "indisoluble de la base; luego entonces, debe
 "estar definido y precisado en la ley, lo cual no
 "ocurre, pues para establecer si un predio se
 "encuentra dentro o fuera de un área urbana de
 "interés catastral, se remite al artículo 16 de la
 "Ley de Catastro, dispositivo en el que, se deja
 "en la autoridad catastral la decisión de definir
 "las áreas urbanas de interés catastral, pues

SUPLENTE
 SECRETARÍA
 DE FISCALÍA



ORTE DE
NACIONES
JERARQUÍA
SALA

"únicamente establece que dichas áreas son las
"delimitaciones territoriales, con o sin traza
"urbana, definidas por las autoridades
"catastrales dentro del territorio de un
"municipio".--- Por lo que resulta evidente que la
"ley deja al arbitrio de las autoridades
"catastrales la delimitación de dichas áreas, y
"por consiguiente la posibilidad de que puedan
"aplicar a los contribuyentes de manera
"caprichosa una u otra base para el pago del
"impuesto, dado que únicamente se señala que
"las áreas urbanas de interés catastral son
"aquéllas delimitaciones territoriales con o sin
"traza urbana que sean definidas por las
"autoridades catastrales dentro del territorio de
"un municipio.--- En consecuencia, se
"contraviene la exigencia constitucional
"consistente en que los elementos esenciales de
"los tributos estén contemplados en ley, a fin de
"que el particular conozca la forma cierta de
"contribuir, ya que en el caso, el numeral 3 de la
"Ley de Hacienda Municipal para el Estado de
"México en vigor, no precisa ni determina la base
"para el cálculo del tributo, ante la indefinición
"de lo que debe entenderse por área urbana de
"interés catastral en que se ubique un inmueble,
"pues ello no se especifica, ni se señala cual sea
"dicha área, para que de esta manera conozca el
"contribuyente en que supuesto se ubica, dado

"que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de
 "Catastro, se deja al arbitrio de la autoridad
 "catastral el hecho de determinar si un inmueble
 "está dentro o fuera de esa área.--- Luego
 "entonces, este Juzgado de Distrito considera
 "que el artículo 3 de la Ley de Hacienda
 "Municipal del Estado de México, en vigor, es la
 "norma esencial y por ello, debe contener los
 "elementos esenciales del impuesto, sujeto,
 "objeto, base, tasa y época de pago;
 "determinación de la base que incluso no se
 "resuelve con el auxilio de la ley secundaria; en
 "efecto, el artículo 16, de la Ley de Catastro del
 "Estado, deja al arbitrio de las autoridades
 "catastrales el determinar si un predio **se**
 "encuentra dentro o fuera de un área urbana de
 "interés catastral; por lo que, si dicha remisión
 "no hace una regulación adecuada de la base del
 "impuesto, sino que claramente contribuye a la
 "confusión, provocando indefensión en el
 "causante del tributo, ello resulta violatorio al
 "principio de legalidad tributaria que prevé, la
 "fracción IV del artículo 31 de la Constitución
 "General de la República.--- Es aplicable la tesis
 "número CXLVIII/97, sustentada por el Tribunal
 "Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
 "Nación, en su sesión privada celebrada el
 "treinta de octubre de mil novecientos noventa y
 "siete, que dice: **LEGALIDAD TRIBUTARIA.**



AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERAL

"ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.- Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesario una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deban soportar; así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso a la ley emitida por el Congreso ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio,

"permite que otras fuentes de la ley vengan a
 "regular parte de la disciplina normativa de
 "determinada materia, pero a condición de que la
 "ley sea la que determine expresa y
 "limitativamente las directrices a las que dichas
 "fuentes deberán ajustarse; esto es, la
 "regulación de las fuentes secundarias deben
 "quedar subordinadas para la materia normativa.
 "En este supuesto, la ley puede limitarse a
 "establecer los principios y criterios dentro de
 "los cuales la concreta disciplina de la materia
 "reservada podrá posteriormente ser establecida
 "por una fuente secundaria. Así, no se excluye la
 "posibilidad de que las leyes contengan
 "remisiones a normas reglamentarias, pero sí
 "que tales remisiones hagan posible una
 "regulación independiente y no claramente
 "subordinada a la ley, lo que supondría una
 "degradación de la reserva formulada por la
 "Constitución en favor del legislador. En suma,
 "la clasificación de la reserva de la ley en
 "absoluta y relativa, se formula con base en el
 "alcance o extensión que sobre cada materia se
 "atribuye a cada especie de reserva. Si en la
 "reserva absoluta la regulación no puede
 "hacerse a través de normas secundarias, sino
 "sólo mediante las que tengan rango de ley; la
 "relativa, no precisa siempre de normas
 "primarias. Basta un acto normativo primario que

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



DETE D.
INACION
JUEZES DE
A. S. S. A.

"contenga la disciplina general o de principio,
 "para que puedan regularse los aspectos
 "esenciales de la materia respectiva. Precicado
 "lo anterior, este Alto tribunal considera que en
 "materia tributaria la reserva es de carácter
 "relativa, toda vez que, por una parte, dicha
 "materia no debe ser regulada en su totalidad
 "por una ley formal, sino que es suficiente ^{solo}
 "un acto normativo primario que contenga la
 "normativa esencial de la referida materia,
 "puesto que de ese modo la presencia del acto
 "normativo primario marca un límite de
 "contenido para las normas secundarias
 "posteriores, las cuales no podrán nunca
 "contravenir lo dispuesto en la norma primaria;
 "y, por otro lado, en casos excepcionales y que
 "lo justifiquen pueden existir remisiones a
 "normas secundarias, siempre y cuando tales
 "remisiones hagan una regulación subordinada y
 "dependiente a la ley, y además constituyan un
 "complemento de la regulación legal que sea
 "indispensable por motivos técnicos o para el
 "debido cumplimiento de la finalidad
 "recaudatoria." Además, de que aún y cuando
 "con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31,
 "fracción IV, Constitucional, los gobernados,
 "están obligados a contribuir a los gastos
 "públicos de la manera proporcional y equitativa
 "que dispongan las leyes; el principio de

"legalidad que este precepto constitucional
 "consagra en materia tributaria garantiza que
 "todos los elementos del tributo a cargo de los
 "gobernados, deban estar consignado
 "expresamente en la ley, tal como ha sido
 "concebido por la Suprema Corte de Justicia de
 "la Nación, en los términos en que aparece en la
 "tesis jurisprudencial publicada bajo el número
 "162, en la página 165, del tomo I, materia
 "constitucional del Apéndice al Semanario
 "Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la
 "letra dice: "IMPUESTOS, ELEMENTOS
 "ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR
 "CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.-
 "(Se transcribe) --- En efecto, conforme a la tesis
 "jurisprudencial transcrita, el principio en
 "examen exige que todos y cada uno de los
 "elementos de los tributos se consignen en una
 "ley expedida por el Congreso de la Unión, de
 "manera que su determinación no quede en
 "manos de las autoridades administrativas.---
 "Este principio se infringe por la norma
 "reclamada, toda vez que en la misma el
 "legislador se limita a establecer que para la
 "determinación del impuesto predial, en los
 "casos en que las leyes fiscales así lo
 "establezcan, deberá estarse a si un inmueble se
 "encuentra dentro o fuera de las áreas urbanas
 "de interés catastral, sin que el propio legislador



SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERATIVA
SALA

"determine cual área es considerada o no de ese
 "interés, es decir, no se determinan los
 "componentes, bases, criterios o reglas que
 "deberán considerarse para el efecto.--- En estas
 "condiciones, la ausencia en la ley reclamada de
 "tales componentes, bases, criterios o reglas es
 "suficiente para considerar que el legislador deja
 "en manos de las autoridades catastrales de
 "cada municipio, de acuerdo con el artículo 16 de
 "la Ley de Catastro para el Estado de México, la
 "facultad para que ellas determinen cuales son
 "consideradas o no áreas de interés catastral y
 "poder así, ubicar a los contribuyentes del
 "impuesto predial sobre cualquiera de los tres
 "supuestos que prevé, el artículo 3 de la Ley de
 "Hacienda Municipal del Estado de México; ello,
 "no obstante que tal componente del impuesto
 "constituye para el contribuyente, en los casos
 "en que así lo determinen las leyes fiscales
 "específicas, un elemento que necesariamente
 "debe considerarse para determinar el monto de la
 "base gravable y, por consiguiente, del tributo a
 "su cargo.--- Por tanto, la circunstancia de que
 "para fijar la base del impuesto predial sea la de
 "observar si un inmueble se encuentra dentro o
 "fuera de las áreas urbanas de interés catastral,
 "conduce a modificar la base gravable y pone de
 "manifiesto que ello constituye un elemento de la
 "contribución y que su función puede limitarse a

"actualizar ciertos valores para el pago del
 "impuesto, pues precisamente al tomar como
 "base para la fijación del impuesto la
 "circunstancia de si el predio se encuentra
 "dentro o fuera de un área urbana de interés
 "catastral, trae como consecuencia modificar el
 "importe de la base gravable y, por tanto, el de
 "incidir de manera determinante en la carga
 "fiscal que el contribuyente debe soportar.--- Por
 "analogía, la tesis de Jurisprudencia P./J.27/95,
 "sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema
 "Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
 "página 52, del tomo II, octubre de 1995, del
 "Semanario Judicial de la Federación que dice:
 "ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL
 "CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO
 "FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES
 "INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR LA
 "GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
 "(TEXTO VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS
 "OCHENTA Y SIETE).- (Se transcribe). --- Es
 "también aplicable, por analogía, la tesis de
 "Jurisprudencia publicada bajo el números 268,
 "en las páginas 250 y 251, del tomo I, materia
 "constitucional del Apéndice al Semanario
 "Judicial de la Federación de 1917-1995, que
 "dice: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY
 "DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL
 "DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 1 DE

SUPRIMIR
 JUSTICIA
 SECRETARÍA
 DE FISCALÍA

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



“ENERO DE 1981 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982,
 “QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CITADO, ES
 “VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
 “CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN
 “IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- (Se
 “transcribe) -- Al haber resultado fundado y
 “eficaz el referido concepto de violación, con el
 “que se ataca la inconstitucionalidad del artículo
 “3 del Decreto 49 que establece el impuesto
 “predial vigente para el año de mil novecientos
 “noventa y ocho, lo procedente es conceder a las
 “quejas, el amparo y protección de la Justicia
 “Federal solicitado; y como consecuencia,
 “resulta innecesario abocarse al estudio y
 “análisis de los restantes conceptos de
 “violación.-- Apoya lo anterior, la tesis de
 “Jurisprudencia número 693, visible en la página
 “466, Parte, y Apéndice citado, que dice:
 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO
 “INNECESARIO DE LOS.- (Se transcribe).”



ORTE DE
 A NACIÓN
 CUERDOS DE
 A SALA

QUINTO.- Inconformes con la sentencia anterior, el
 Gobernador Constitucional del Estado de México y el Secretario
 General de Gobierno de dicha Entidad Federativa, interpusieron
 recurso de revisión en su contra.

Asimismo, el Congreso del Estado de México y el Tesorero
 Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, interpusieron recurso
 de revisión en contra de la sentencia que se revisa.

SEXTO.- Mediante auto de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requirió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a fin de que informara a este Alto Tribunal, si el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, había desahogado la prevención que se le formuló en proveído de seis de agosto del mismo año, por el cual el a quo le solicitó exhibiera copias del recurso de revisión interpuesto.

Con motivo de ese requerimiento, por acuerdo de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Federal determinó que en virtud de que había transcurrido el término de tres días que se le concedió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, para que exhibiera las copias del recurso de revisión interpuesto, se había efectivo el apercibimiento contenido en auto de seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y en consecuencia, se tuvo por no interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad supranombrada.

Por otra parte, en proveído de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó el recurso de revisión interpuesto por el Secretario General de Gobierno del Estado de México, por considerar que el fallo recurrido no afecta directamente los actos reclamados de la referida autoridad del Estado de México.

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Finalmente, en esa misma fecha el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Gobernador Constitucional del Estado de México y por el Congreso Local de la misma Entidad Federativa; asimismo, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal para que expresara lo que a su representación social convenga, sin que dicho representante social, realizara manifestación alguna.

SÉPTIMO.- Por auto de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se turnara el expediente a la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para que formulara el proyecto de resolución respectivo.

TE DE
NACION
EROS DE
SALA

Previo dictamen de la Ministra Ponente, en proveído de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Presidente de este Alto Tribunal, ordenó se remitieran los presentes autos a la Sala de la adscripción de la Ministra Ponente, en virtud de que no se está en el caso de someter a la consideración del Tribunal Pleno el presente asunto.

Por auto de veintiséis de mayo del año en curso, el Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el avocamiento de la Sala y turnó nuevamente el expediente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para que elaborara el proyecto de resolución respectivo.

En sesión de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaron enviar este asunto a este Tribunal Pleno para su resolución; por lo que la Ministra Ponente emitió dictamen, en el que solicitó que este asunto, se enviara al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo de veinticuatro del mismo mes y año, el Presidente de la Primera Sala acordó enviar este asunto al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Presidente, por auto de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, se avocó al conocimiento del mismo.

Finalmente, mediante acuerdo del seis de abril de dos mil, con fundamento en el punto Primero inciso a) del Acuerdo Plenario 4/2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo inmediato anterior, así como en los artículos 21, fracción II, inciso a), y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se dispuso devolver el mismo a la Ministra Ponente para que se presentara el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el punto primero, inciso a), del Acuerdo Plenario número 4/2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de marzo de dos mil, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas legislaciones locales, como lo son la Ley del Catastro del Estado de México, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y la Ley de Hacienda Municipal, ambas disposiciones del Estado de México.

DE DE
ACCIÓN
DOS DE
JULIO

SEGUNDO.- El Gobernador del Estado de México, formuló el siguiente agravio:

"ÚNICO.- Violación a lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo.--- Razonamientos del a quo, que causan agravio a esta representación toda vez que, las áreas de interés catastral requieren estar definidas en el artículo 16, de la Ley de Catastro, en virtud de que solamente es una delimitación territorial de un municipio definido por las autoridades catastrales, quienes poseen los conocimientos técnicos y la tecnología requerida para poder dividir al estado en áreas urbanas de interés catastral, áreas ya catastradas, integradas al padrón catastral y esto

"se ha hecho atendiendo a sus servicios y
 "equipamiento urbano, que sirven de base para
 "establecer los valores unitarios de suelo y de
 "construcción.--- En la propia sentencia el a quo,
 "manifiesta: (Se transcribe).--- Argumentos del a
 "quo, que causan agravio a esta autoridad, ya que
 "en ningún momento las autoridades catastrales
 "pueden aplicar a los contribuyentes de manera
 "caprichosa a una u otra base para el pago de
 "impuesto predial, los tres supuestos previstos en
 "el artículo 3, de la Ley de Hacienda Municipal son
 "muy claros, el primero, tratándose de inmuebles
 "ubicados dentro de las áreas urbanas de interés
 "catastral; el segundo, de inmuebles ubicados
 "fuera de las áreas urbanas de interés catastral y
 "el tercero, para los inmuebles ubicados fuera de
 "las áreas urbanas de interés catastral, cuya
 "obligación de pago se genere por primera vez.---
 "Para el cobro del impuesto predial se aplican las
 "reglas y tablas previstas en los artículos 3 y 4, de
 "la Ley en cita, las tablas de valores unitarios de
 "suelo y de construcción aprobadas por la LIII
 "Legislatura Local, así como lo dispuesto por el
 "artículo 11, de la Ley de Ingresos de los
 "Municipios del Estado de México para el Ejercicio
 "Fiscal de 1998; por lo cual no puede existir tal
 "capricho de la autoridad catastral.--- En la propia
 "sentencia que se recurre, al a quo, expone: (Se
 "transcribe).--- Argumento del a quo que causan

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"agravio al suscrito en virtud de que en ningún momento se contraviene la exigencia constitucional de que los elementos esenciales de los tributos estén contemplados en la Ley de Hacienda Municipal, a fin de que el particular conozca la forma cierta de contribuir, ya que si bien en el artículo tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, no se encuentra definida lo que es un área de interés catastral, esto es, un vocablo técnico para llamar así a las áreas de terreno del Estado que se encuentran ya integradas al padrón catastral, ya catastradas; y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, no se podría definir todas y cada una de las áreas urbanas de interés catastral; por eso existe el catastro y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, auxiliar de las autoridades fiscales para efectos del impuesto predial, quien determina los valores catastrales de las fincas de la entidad. Además, de que los contribuyentes pueden ubicar su área urbana de interés catastral, por que ahí viven. --- Consideraciones del Juez de Distrito que causan agravio a esta representación en virtud de que el artículo 3 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, únicamente regula la base del impuesto predial; el artículo 1, el objeto, que "es la propiedad o posesión de predios y las construcciones

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL

"permanentes adheridas a ellos, que se ubiquen
 "dentro del territorio del municipio"; el artículo 2,
 "establece quienes son los sujetos, "los
 "propietarios y poseedores de predios urbanos o
 "rústicos, ejidales o comunales, ubicados dentro
 "del territorio del copropietario y los coposeedores
 "de bienes inmuebles sujetos a régimen de
 "copropiedad o condominio, y los titulares de los
 "certificados de participación inmobiliaria; los
 "poseedores de bienes inmuebles sujetos a
 "fideicomiso; los ejidatarios, los comuneros, los
 "propietarios y beneficiarios de plantas de
 "beneficio y establecimientos metalúrgicos"; el
 "artículo 4, decreta como se determina el impuesto
 "predial; el artículo 18, del multicitado dispositivo
 "fiscal estatal, estatuye la época de pago, que esta
 "es anual en una exhibición, cuando su importe sea
 "hasta de tres días de salario mínimo general de la
 "zona económica correspondiente a la ubicación
 "del inmueble; cuando su importe sea mayor a tres
 "días y hasta seis días de salario mínimo, su pago
 "se hará en dos exhibiciones; cuando exceda de
 "seis días de salario mínimo general, su pago se
 "dividirá en seis partes iguales, que se cubrirán
 "bimestralmente en los meses de enero, marzo,
 "mayo, julio, septiembre y noviembre; en el artículo
 "19, se determina la obligación de los
 "contribuyentes de calcular el impuesto predial a
 "su cargo; además, en el artículo 4 Bis, se regulan

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"la exenciones; en los artículos 9 y 13, se decretan
 "las modificaciones a las bases; en los artículos 25
 "Bis, regulan las manifestaciones y avisos;
 "además de que en el interés catastral, y si bien el
 "Instituto de Información e Investigación
 "Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
 "México, determina cada una de aquellas, lo hace
 "atendiendo al procedimiento catastral, con la
 "tecnología adecuada y no arbitrariamente; así
 "también, el contribuyente al calcular el impuesto
 "predial, ubica su terreno y construcción en su
 "caso, dentro del área urbana de interés catastral
 "respectiva; por lo cual no es violatorio el artículo 3
 "de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
 "México del principio de legalidad tributaria
 "previsto en el artículo 31, fracción IV, de la
 "Constitución General de la República.--- En la
 "propia sentencia que es materia de este recurso el
 "a quo, hace los siguientes razonamientos: (Se
 "transcribe).--- Razonamientos del Juez de Distrito
 "que causan agravio a esta autoridad en virtud de
 "que, la LIII Legislatura del Estado al legislar al
 "respecto a la Ley de Catastro del Estado de
 "México, estableció: el catastro como sistema de
 "información territorial del estado que tiene como
 "finalidad obtener un inventario analítico de los
 "inmuebles con base a sus características; la
 "actividad catastral como el conjunto de
 "procedimientos y acciones que permiten integrar



ORTE DE
 17-08
 JUECES DE
 SALA

"y conservar y mantener actualizado el inventario
 "analítico de los inmuebles, mediante la asignación
 "de una clave catastral; el sistema de valuación
 "catastral, los elementos del sistema y el
 "procedimiento para la aplicación de la valuación
 "de inmuebles; y así se legisló ya que a fin de
 "hacer efectiva la justicia distributiva, la
 "proporcionalidad y equidad del impuesto predial
 "en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
 "México, no es posible establecer una clasificación
 "que los diferentes valores, de los inmuebles y
 "construcciones de las diversas áreas del
 "estado, sus servicios, equipamiento e
 "infraestructura urbana, tipo y calidad de las
 "construcciones a fin de que los sujetos del
 "impuesto cuyos predios y construcciones que
 "tengan los mismos elementos de valuación
 "catastral paguen atendiendo al valor de su
 "terreno, de su construcción y al valor unitario de
 "suelo y de construcción, en su caso, atentos a las
 "tablas de valores unitarios de suelo y de
 "construcción que aprobó la LIII Legislatura e
 "invertieron en su elaboración los ayuntamientos
 "respectivos y el Instituto de Información e
 "Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
 "del Estado de México; aplicando los
 "procedimientos, técnica y personal especializado
 "en la actividad catastral.--- Atento a lo expuesto en
 "el párrafo que antecede la Ley de Hacienda



ORTE DE
NACION
JUDOS DE
SALA

"Municipal de la entidad, en cuanto al impuesto
"predial, la Ley de Catastro del Estado, regla del
"catastro y de la actividad catastral, y las tablas de
"Valores Unitarias de Suelo y de Construcción; la
"primera vez que estatuye impuesto predial, la
"segunda, del procedimiento de valuación de los
"inmuebles y la tercera, instrumento
"complementario para la determinación del tributo;
"reglamenta la actividad de las autoridades fiscales
"y catastrales impidiendo su arbitrariedad en la
"ubicación de los inmuebles en las zonas de
"interés catastral, en la determinación y cobro del
"impuesto predial.--- Consideraciones del a quo
"que causan agravio a esta representación, toda
"vez que el inmueble se encuentre dentro o fuera
"de las áreas de interés catastral no implica
"modificar la base gravable, no constituye un
"elemento de la contribución, ni su función se
"limita a actualizar ciertos valores para el pago del
"impuesto predial, ni incide de manera
"determinante en la carga fiscal que el
"contribuyente debe soportar.--- El hecho de que el
"artículo 3, de la Ley de Hacienda Municipal del
"Estado de México, se refiera a las áreas urbanas
"de interés catastral, es por que dentro de estas
"áreas, a las homogéneas, se les asigna un valor
"unitario de suelo promedio y dentro de las áreas
"homogéneas pueden existir franjas denominadas
"bandas de valor, cuyos inmuebles pueden tener

"un valor unitario de suelo diferente a la propia
 "área homogénea, atendiendo a las características
 "de los inmuebles.--- En el artículo 4, de la Ley en
 "comento, se establece como se determinará el
 "impuesto predial, plasmando una tarifa para los
 "inmuebles ubicados dentro de las áreas urbanas
 "de interés catastral y para los inmuebles ubicados
 "fuera de las áreas urbanas de interés catastral,
 "nos remite a la Ley de Ingresos de los Municipios,
 "misma que en la parte conducente de su artículo
 "11, regula: "Los contribuyentes del impuesto
 "predial propietarios de inmuebles ubicados fuera
 "del área urbana de interés catastral, pagarán la
 "cantidad que resulte multiplicar el factor 1.12 al
 "importe pagado en el ejercicio 1997"; así también,
 "se establece otra tarifa para los inmuebles
 "ubicados fuera de las áreas urbanas de interés
 "catastral cuya obligación de pago se genere por
 "primera vez.--- De lo expuesto, es de afirmarse que
 "el artículo 3, de la Ley de Hacienda Municipal del
 "Estado de México, se apega al principio de
 "legalidad prioritaria previsto en el artículo 31,
 "fracción IV, de la Constitución Política de los
 "Estados Unidos Mexicanos."

TERCERO.- Por su parte, la LIII Legislatura del Estado de México, expresó los siguientes agravios:

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"PRIMERO.- VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 77
 "FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 73
 "FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.--- El
 "Juez de Distrito viola en perjuicio de la
 "responsable la causal de improcedencia
 "señalada en la fracción VI, del artículo 73, de la
 "Ley de Amparo, al omitir totalmente su
 "aplicación, pues no obstante que establece:
 "Artículo 73 (Se transcribe).--- El a quo, afirma:
 "(Se transcribe).--- Para tal propósito antes de
 "verificar el texto de la norma impugnada,
 "conviene tener presente la tesis jurisprudencial
 "que aparece publicada en la página 123, del
 "Tomo III, abril de 1996, Pleno, Salas y
 "Tribunales Colegiados de Circuito, Novena
 "Época, Semanario Judicial de la Federación,
 "que establece la diferencia entre una ley
 "autoaplicativa y otra heteroaplicativa, basada en
 "el concepto de individualización
 "incondicionada.--- Dicha jurisprudencia es del
 "tenor literal siguiente: (Se transcribe).--- De
 "acuerdo al texto jurisprudencial, la ley es
 "autoaplicativa o de individualización
 "incondicionada, cuando las obligaciones
 "derivadas de ella nacen al mismo tiempo en que
 "esta tiene vigencia independientemente de que
 "se actualice o no alguna condición legal.--- La
 "ley es heteroaplicativa o de individualización
 "condicionada, cuando las obligaciones de dar,



LA
 ACUERDOS
 SALA

"hacer o no hacer que impone la ley, no surgen
 "en forma automática con su sola entrada en
 "vigor sino que se requiere para que cause
 "perjuicio al quejoso, un acto concreto que
 "condicione su aplicación.-- Precisadas las
 "definiciones de una ley autoaplicativa y
 "heteroaplicativa, se examina el texto de los
 "artículos 1 y 3 de la Ley de Hacienda Municipal
 "del Estado de México. (Se transcriben).--- De la
 "simple lectura de los preceptos, se advierte que
 "no se trata de normas de carácter
 "autoaplicativo, ya que las hipótesis que en ellas
 "se contienen necesitan de una condición legal
 "para que nazca la obligación de efectuar el pago
 "del impuesto predial.-- Se requiere de un acto
 "concreto de aplicación de la ley; a través de un
 "acto administrativo o jurisdiccional, incluso el
 "acto jurídico emanado de la voluntad de la
 "quejosa, o el requerimiento que les hagan las
 "autoridades señaladas como responsables para
 "que cumplan lo dispuesto en los preceptos
 "legales cuya constitucionalidad se cuestiona.--
 "De ello se desprende el carácter
 "heteroaplicativo de la Ley de Hacienda
 "Municipal del Estado de México.-- Sostiene lo
 "anterior, el hecho de que la obligación nace
 "cuando son sujetos, del pago del impuesto
 "predial, empero si dejan de ser sujetos de este
 "impuesto por cualquier causa, la obligación se

SUPLENTE
 JUSTICIA DE
 RECURSOS

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"extinguirá, por lo que la sola vigencia de los
"decretos impugnados, no le irrogan a la
"quejosa, perjuicio alguno en su esfera de
"derechos debidamente tutelados por la ley.- - -

"SEGUNDO.- VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 77
"FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO
"73, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY DE

"AMPARO.--- Igualmente el a quo, viola en
"perjuicio de la Legislatura del Estado de México,
"lo consagrado en el artículo 73, fracción V, de la
"Ley de Amparo, que establece: (Se transcribe).--

"- El Juez de Distrito en el considerando cuarto
"afirma: (Se transcribe).-- Con lo cual, no

"acredita la quejosa, que se encuentra bajo los
"supuestos de los decretos impugnados, ya que

"no acredita que la sola expedición de la ley le
"causa perjuicio o bien, que con su aplicación se

"afecten sus intereses, por lo que para poder ser
"sujeto de la norma y que sus disposiciones

"afecten su interés jurídico o bien, que exista la
"actualización jurídica mediante un acto

"concreto de aplicación, lo cual no se dio en el
"presente caso.--- Por lo tanto, los decretos, no

"le afectan sus intereses jurídicos, pues la
"afectación debe de ser susceptible de

"apreciarse de manera objetiva para que pueda
"constituir un perjuicio.--- Sobre el particular,

"resultan aplicables las tesis de jurisprudencia
"números ciento setenta y seis, ciento setenta y



ORTE DE
Nº 101
JUECES DE
SALA

"nueve, visibles en las fojas ciento setenta y
 "seis, ciento setenta y siete y ciento setenta y
 "nueve, tomo I, materia constitucional del
 "Apéndice del Semanario Judicial de la
 "Federación 1917-1995, que dicen: "INTERÉS,
 "JURÍDICO COMPROBACIÓN DEL." "INTERÉS
 "JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN
 "EL AMPARO CONTRA LEYES." (Se
 "transcriben).--- Lo anterior es así, en virtud de
 "que de conformidad con lo establecido por el
 "artículo 4 de la ley de la materia, el ejercicio de
 "la acción constitucional está reservado
 "únicamente a quien reciente un perjuicio con
 "motivo de un acto de autoridad o por una ley.---
 "Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que
 "proceda la acción de amparo presupone la
 "existencia de un derecho legítimamente
 "tutelado, que cuando se transgrede por la
 "actuación de una autoridad, faculta a su titular
 "para acudir ante el órgano jurisdiccional
 "demandando el cese de esa violación.--- Este
 "derecho protegido por el ordenamiento legal
 "objetivo es lo que constituye el interés jurídico,
 "que la Ley de Amparo, toma en consideración. -
 "- - TERCERO.- VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 77,
 "FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.---- El a
 "quo, en el considerando quinto, afirma: (Se
 "transcribe).--- Argumentos inconducentes, en
 "atención a lo siguiente: El contribuyente del

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"Impuesto Predial, tiene la obligación de
 "conformidad con el artículo 19 de la Ley de
 "Hacienda Municipal del Estado de México, de
 "calcular el impuesto predial a su cargo,
 "entendiéndose como acto de buena fe; sin
 "embargo, la autoridad fiscal estará facultada
 "para determinar el monto del impuesto a pagar
 "en términos de las disposiciones legales
 "aplicables y conforme a los datos contenidos en
 "las declaraciones que los contribuyentes
 "presenten y los datos que aporten las
 "autoridades catastrales competentes, es decir,
 "se está frente a la presencia de un impuesto
 "auto declarativo, autoliquidable.--- El sistema
 "catastral de valores de características
 "primordiales, pretende la igualdad de los
 "valores catastrales en inmuebles de similares
 "características para ello, mediante
 "procedimientos técnicos se definieron en todo
 "el Estado y para cada Municipio, las áreas
 "urbanas de interés catastral, las áreas
 "homogéneas, las bandas de valor y los valores
 "unitarios de suelo y de construcción, estos
 "últimos, tomando en consideración los valores
 "inmobiliarios predominantes para cada área
 "homogénea; de tal manera, que el valor
 "catastral se acerque lo más posible al valor
 "comercial y permita tomarlo como base para el
 "cálculo de impuestos inmobiliarios en los

TE 88
 No. 107
 EDO. 20
 8 de 8

"**términos que determinan las leyes respectivas.-**
 "-- De lo que se desprende que a partir de 1998,
 "con sustento en la Ley de Catastro del Estado
 "de México, y en los elementos generados por el
 "programa de modernización catastral, se forma
 "con base gravable del impuesto el valor
 "catastral de los inmuebles urbanos, obtenido
 "conforme a los procedimientos y tablas de
 "valores unitarios.--- De la Ley de Catastro del
 "Estado de México y de la Tablas de Valores
 "Unitarios de Suelo y de Construcción, se
 "destaca lo siguiente: Se establece un sustento
 "jurídico que permite la modernización del
 "sistema catastral, a través de un procedimiento
 "que respeta las garantías de equidad y
 "proporcionalidad en materia inmobiliaria,
 "permite a los Ayuntamientos la operación del
 "Catastro, en lo relativo al registro, identificación
 "y localización de inmuebles, mediante la clave
 "catastral y el control de declaraciones, que para
 "manifestar el valor de los inmuebles presenten
 "los particulares, y posibilita la manifestación del
 "valor catastral mediante la aplicación de las
 "Tablas de Valor con la información que
 "suministran los particulares, y posibilita la
 "manifestación del valor catastral a la autoridad
 "municipal con procedimientos y tramites
 "simplificados.--- Las Tablas de Valores Unitarias
 "de Suelo y de Construcción, establecen valores

EXHIBICION
 NÚMERO
 123456789
 123456789

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



OPINION
ANALITICA
QUEDOS EN
A. G. A. S.

"de características predominantes, lo que
 "conlleva a establecer que los inmuebles con
 "características similares y ubicados en la
 "misma área urbana, tengan valores unitarios
 "catastrales iguales.--- La determinación de los
 "valores catastrales se da mediante
 "procedimientos técnicos y se definen en el
 "territorio del Estado y por cada Municipio, las
 "áreas urbanas de interés catastral, las áreas
 "homogéneas, las bandas de valor y los valores
 "unitarios de suelo y de construcción, se
 "encuentran en las Tablas de Valor.--- La Ley del
 "Catastro, establece un sistema de catastro que
 "permite valorar adecuadamente, considerando
 "en todo momento su uso, clase,
 "particularidades físicas y el entorno urbano en
 "que se sitúan, a efecto de garantizar la
 "satisfacción de los principios de
 "proporcionalidad y equidad.--- Respecto a las
 "Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de
 "Construcción, se determina su aplicabilidad
 "atendiendo a su uso y clase, dándose los
 "elementos necesarios para que los particulares
 "puedan calcular el valor catastral de sus
 "inmuebles, lo que implica un avance en la
 "simplificación administrativa.--- La aprobación
 "de las mismas por la Legislatura Local, les
 "otorga la fijeza y el sustento legal necesario
 "para su aplicación, contribuyendo a que los

"actos administrativos estén dotados de la
 "debida certeza jurídica.--- Por otra parte, se
 "eliminó el concepto de categoría reduciéndose
 "de 88 valores unitarios a 46; además, se
 "disminuyeron los valores unitarios tanto de
 "suelo como de construcción en un 25%.--- Las
 "reformas y adiciones a la Ley de Hacienda
 "Municipal del Estado de México, tiene como
 "objeto central, actualizar las normas relativas al
 "impuesto predial, a efecto de hacerlas acordes
 "con la nueva Ley del Catastro y al Programa de
 "Modernización Catastral, resultado de los
 "trabajos técnicos realizados durante dos años y
 "la participación de las autoridades de los
 "Municipios de la Entidad, lo que permite dar
 "objetividad y uniformidad al cobro de ese
 "gravamen, asignándole mayores niveles de
 "equidad, proporcionalidad y justicia tributaria.---
 "Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de
 "Hacienda Municipal del Estado de México,
 "señala (Se transcribe).--- De lo cual se
 "desprenden tres supuestos perfectamente
 "definidos para la determinación del impuesto
 "predial, ya que el primero refiere que se tomará
 "como base el valor catastral cuando los predios
 "se encuentren ubicados en las áreas urbanas de
 "interés catastral, estableciéndose que al valor
 "catastral de la construcción se le aplicará una
 "reducción según el número de años





ESTADO DE
MÉXICO
SECRETARÍA DE
FISCALÍA

"transcurridos desde la fecha de su terminación,
"en el entendido de que en ningún caso dicha
"reducción excederá del 40% del valor total de la
"construcción, señalándose la cantidad a reducir
"conforme a la Tabla enunciada en el propio
"artículo.--- Por lo que el artículo 16 de la Ley del
"Catastro del Estado de México, preceptúa que el
"área urbana de interés catastral, es aquella
"delimitación territorial, con o sin traza urbana,
"definida por las autoridades catastrales, dentro
"del territorio de un Municipio, y el artículo 15 de
"este ordenamiento señala que el Sistema de
"Valuación Catastral del Estado de México, tiene
"como base, las características predominantes
"en una circunscripción territorial, y tomará
"como referencia los valores de mercado del
"suelo y de la construcción, por lo cual no se
"deja al arbitrio de la autoridad catastral la
"aplicación de la base para la determinación del
"impuesto predial, ya que está perfectamente
"definida, por los propietarios o poseedores de
"inmuebles al sujetarse a lo dispuesto por esta
"ley, a las normas y procedimientos técnicos y
"administrativos establecidos por el Instituto, y
"los criterios de clasificación y las Tablas de
"Valor de Suelo y de Construcción.--- Por el
"contrario, la determinación de la base del
"impuesto predial a que se refieren las
"fracciones II y III del artículo 3 de la Ley de

"Hacienda Municipal del Estado de México, se
 "aplica a inmuebles ubicados fuera de las áreas
 "urbanas de interés catastral.--- El principio de
 "equidad, radica medularmente en la igualdad
 "ante la ley tributaria de todos los objetos
 "pasivos de un mismo tributo, que se encuentran
 "en la misma situación jurídica concreta, los que
 "bajo esa condición, deben recibir un tratamiento
 "idéntico en lo concerniente a hipótesis de
 "causación, deducciones permitidas y exención
 "entre otras.--- Aunado a lo anterior, el registro,
 "identificación, localización y control de los
 "inmuebles se hace mediante la asignación de
 "una clave catastral que consiste en un Código
 "alfa numérico de 16 posiciones: (Se transcribe)
 "-- En razón de lo anterior se reitera, no se deja a
 "arbitrio de las autoridades catastrales, la
 "definición de las áreas urbanas de interés
 "catastral.--- Por otra parte, la Ley de Ingresos de
 "los Municipios del Estado de México, para el
 "ejercicio 1998, en su artículo 1 establece, que la
 "Ley de Hacienda Pública de los Municipios del
 "Estado, percibirá durante el ejercicio fiscal de
 "1998, los ingresos provenientes de impuestos,
 "entre los que se encuentran el impuesto predial,
 "que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de
 "Hacienda Municipal, tiene por objeto la
 "propiedad o posesión de predios y las
 "construcciones permanentes adheridas a ellos,



SUPREMA C.
 JUSTICIA DE LA
 FEDERACIÓN
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 Y FALLOS



"que se ubiquen dentro del territorio del
 "municipio.--- A mayor abundamiento, en la
 "propia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
 "México, se señalan los elementos esenciales
 "del impuesto como son: el sujeto, objeto, base,
 "tasa y época de pago.--- En ese orden de ideas,
 "se hace notar, que el impuesto predial reúne los
 "requisitos y principios de legalidad,
 "generalidad, abstracción, impersonalidad,
 "equidad, proporcionalidad, certeza,
 "certidumbre, confianza y demás elementos
 "característicos de toda contribución.--- Lo
 "anterior, en función de que la exigencia
 "constitucional que regula el artículo 31, fracción
 "IV, se traduce en una justicia tributaria y
 "distributiva, que exige tratar a los iguales como
 "iguales y a los desiguales como desiguales, y
 "este postulado no puede cumplirse, si no se
 "toma en cuenta la capacidad de los
 "contribuyentes.--- Aunado a lo anterior, el
 "impuesto predial contiene los elementos
 "básicos requeridos, ya que en las leyes
 "tributarias respectivas, al establecerse sus
 "elementos, se cumple con lo establecido en la
 "fracción IV del artículo 31 de la Constitución
 "Federal."

CUARTO.- No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, contenido en el considerando

segundo del fallo que se revisa, en atención a que no se expresó agravio por la parte a quien pudiera perjudicar

QUINTO.- Previo al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por las autoridades recurrentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examina los argumentos formulados por la LIII Legislatura del Estado de México, mediante los cuales se plantean causales de improcedencia y se solicita se decrete el sobreseimiento del presente juicio.

Aduce la inconforme, que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: FRACCIÓN VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."

No le asiste la razón a la recurrente, en virtud de que contrario a lo que alega en su agravio respectivo, la Ley del Catastro del Estado de México, es un dispositivo autoaplicativo.

Ciertamente, los artículos 1º, 2º y 3º, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, establecen:

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



SECRETARÍA
DE JUSTICIA
FEDERAL
SALA

"Artículo 1.- El objeto de este impuesto es la
 "propiedad o posesión de predios y las
 "construcciones permanentes adheridas a ellos,
 "que se ubiquen dentro del territorio del
 "Municipio. - - Artículo 2.- Son sujetos de este
 "impuesto: I.- Los propietarios y poseedores de
 "predios urbanos o rústicos, ejidales o
 "comunales, ubicados dentro del territorio del
 "Municipio y de las construcciones permanentes
 "sobre ellos edificadas. - - - II.- Los
 "copropietarios y los coposeedores de bienes
 "inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o
 "condominio, y los titulares de certificados de
 "participación inmobiliaria. - - - III.- Los
 "poseedores de bienes inmuebles sujetos a
 "fideicomiso. - - - IV.- Los ejidatarios, los
 "comuneros, los propietarios y beneficiarios de
 "plantas de beneficio y establecimientos
 "metalúrgicos. - - - V.- Con responsabilidad
 "objetiva, los adquirentes por cualquier título de
 "predios urbanos o rústicos, ejidales o
 "comunales, y de las construcciones
 "permanentes sobre ellos edificadas. - - - VI.- Con
 "responsabilidad solidaria, los propietarios de
 "bienes inmuebles que hubiesen prometido en
 "venta o hubiere vendido con reserva de
 "dominio. - - - VII.- Con responsabilidad solidaria,
 "los servidores públicos que indebidamente
 "formulen certificados de no adeudo, sin

"perjuicio de la responsabilidad administrativa o
 "penal en que se incurra.- - - Artículo 3.- Será
 "base para la determinación del impuesto
 "predial: I.- Tratándose de inmuebles ubicados
 "dentro de las áreas urbanas de interés catastral,
 "el valor catastral.- - - Al valor catastral de la
 "construcción, se le aplicará una reducción
 "según el número de años transcurridos desde la
 "fecha de su terminación, en el entendido de que
 "en ningún caso dicha reducción excederá del
 "40% del valor total de la construcción.--- La
 "cantidad a reducir se determinará conforme a la
 "siguiente tabla: De 0 a 4 años
 "0.15%
 "De 5 a 9 años
 "0.25%
 "De 10 a 14 años
 "0.50%
 "De 15 años en adelante
 "1.00%
 "II.- El monto pagado en el ejercicio anterior por
 "concepto de este impuesto, en el caso de
 "inmuebles ubicados fuera de las áreas de
 "interés catastral; y III.- Para los inmuebles
 "ubicados fuera de las áreas urbanas de interés
 "catastral, cuya obligación de pago se genere
 "por primera vez, la superficie de terreno y de
 "construcción, si la hubiera."

SUPLENTE
 JUSTICIA DE
 LA REPUBLICA

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Por otra parte, es oportuno establecer cuáles son las características de una ley autoaplicativa.

Por ley autoaplicativa, debemos entender aquel cuerpo normativo, que con su sola vigencia, afecta de manera inmediata al gobernado, independientemente de que se produzca o no un acto posterior de aplicación por parte de cualquier autoridad.

En otras palabras, cuando se inicia la vigencia de una ley autoaplicativa, el gobernado, no puede dejar de cumplir el imperativo que la norma le impone; en virtud de que su vinculación con la misma es inmediata, debido a que dicho cuerpo normativo crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligación.

Así las cosas, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, es de naturaleza autoaplicativa y no heteroaplicativa como equivocadamente lo sustenta la inconforme.

Esto es así, en atención a que del texto de las normas combatidas, se advierte que para los sujetos de ese impuesto, su obligación nace en el momento en que tiene vigencia, es decir, están identificados plenamente qué sujetos deben de cubrir el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, al señalar que estarán obligadas aquellas personas que sean propietarias o poseedoras de predios y las construcciones permanentes adheridas a ellas, que se ubiquen dentro del territorio de los Municipios del Estado de México.

Por tanto, es obvio que las normas impugnadas en esta vía constitucional, son de naturaleza autoaplicativa, porque desde el momento de su vigencia causa perjuicio a la esfera jurídica de las ahora quejas, sin que sea necesario un acto ulterior de autoridad.

Apoya los anteriores razonamientos, la siguiente tesis jurisprudencial:

Tesis jurisprudencial

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VI, Julio de 1997

Tesis: P./J. 55/97

Página: 5

SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARÍA
LA 111

**"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y
"HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN
"EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN
"INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes
"autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene
"acudir al concepto de individualización
"incondicionada de las mismas, consustancial a
"las normas que admiten la procedencia del juicio
"de amparo desde el momento que entran en vigor,
"ya que se trata de disposiciones que, acorde con
"el imperativo en ellas contenido, vinculan al
"gobernado a su cumplimiento desde el inicio de**

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"su vigencia, en virtud de que crean, transforman o
 "extinguen situaciones concretas de derecho. El
 "concepto de individualización constituye un
 "elemento de referencia objetivo para determinar la
 "procedencia del juicio constitucional, porque
 "permite conocer, en cada caso concreto, si los
 "efectos de la disposición legal impugnada ocurren
 "en forma condicionada o incondicionada; así la
 "condición consiste en la realización del acto
 "necesario para que la ley ^{adquiera}
 "individualización, que bien puede revestir el
 "carácter de administrativo o jurisdiccional, e
 "incluso comprende al acto jurídico emanado de la
 "voluntad del propio particular y al hecho jurídico,
 "ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro
 "de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las
 "obligaciones derivadas de la ley nacen con ella
 "misma, independientemente de que no se
 "actualice condición alguna, se estará en presencia
 "de una ley autoaplicativa o de individualización
 "incondicionada; en cambio, cuando las
 "obligaciones de hacer o de no hacer que impone
 "la ley, no surgen en forma automática con su sola
 "entrada en vigor, sino que se requiere para
 "actualizar el perjuicio de un acto diverso que
 "condicione su aplicación, se tratará de una
 "disposición heteroaplicativa o de individualización
 "condicionada, pues la aplicación jurídica o



JORNAL DE
 LA NACIÓN
 ACUERDOS DE
 LA SALA

"material de la norma, en un caso concreto, se
"halla sometida a la realización de ese evento."

✓
"Amparo en revisión 2104/91. Corporación
"Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de
"febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos.
"Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de
"Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David
"Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril
"Velázquez.

✓
"Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A.
"y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente:
"Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez
"López.

✓
"Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y
"otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez
"votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.
"Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
"Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

✓
"Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés
"González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez
"votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente:
"Genaro David Góngora Pimentel. Secretario:
"Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

✓
"Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa
"Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997.
"Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de
"Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez
"Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
"Alejandro Sánchez López.

✓
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
"el siete de julio en curso, aprobó, con el número
"55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede.
"México, Distrito Federal, a siete de julio de mil
"novecientos noventa y siete."

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Igualmente, es aplicable en la especie, el criterio aislado, que dice:

Tesis aislada

Séptima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 103-108 Primera Parte

Página: 167

"LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA.

"La ley de Amparo distingue, en su artículo 73,

"fracción V, entre las leyes que por su sola

"expedición entrañan violación de garantías y

"aquellas que para realizar las violaciones

"requieren, además de la expedición, un acto

"posterior de autoridad; por tanto, esta distinción

"no se basa en que al momento de expedirse la

"norma existen individuos colocados en su

"hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el

"mandamiento; si para realizar éste debe intervenir

"la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le

"puede combatir en amparo por su sola

"expedición; si, en cambio, basta el imperativo de

"la norma para que el particular no pueda dejar de

"cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los

"órganos del Estado es meramente pasiva ante la

"realización del mandato de observancia general,

"se está frente a disposiciones que por su sola

"expedición pueden atacarse en el juicio

"constitucional de garantías, si se les estima

"anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación."

"Amparo en revisión 3156/53. Miguel González Rivas. 4 de octubre de 1977. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."

"Séptima Época, Primera Parte:

"Volumen 83, página 13. Amparo en revisión 1934/51. Rosaura Villavicencio y coags. (acumulados). 11 de noviembre de 1975. Unanimidad de 15 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas."

"Volumen 76, página 49. Amparo en revisión 3125/50. Negociación Pulquera, S. de R. L. de C. V. 22 de abril de 1975. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."

"Volumen 4, página 43. Amparo en revisión 4672/54. Rosario de Anda Medina. 11 de abril de 1969. Unanimidad de 21 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa."

Finalmente, es aplicable por identidad de razón, el criterio aislado, que se transcribe:

*Tesis aislada
Séptima Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 217-228 Tercera Parte
Página: 93*

"LEYES AUTOAPLICATIVAS. CONCEPTO. La ley tiene carácter de autoaplicativa cuando, con su sola vigencia, afecta de manera inmediata al

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



**"gobernado, independientemente de que se
"produzca o no un acto posterior de autoridad que
"la aplique de manera concreta."**

**"Amparo en revisión 1525/86, Usher, Sociedad
"Anónima, e Industrial Soconusco, Sociedad
"Anónima. 28 de enero de 1987. Unanimidad de
"cuatro votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de
"Velasco.**

"Véanse:

**"Semanario Judicial de la Federación, Séptima
"Época, Volumen 35, Tercera Parte, página 29.**

"Apéndice 1917-1954, tesis 637, página 1143.

**"Nota: En el Semanario Judicial de la Federación,
"Volúmenes 217-228, página 93, se señala que el
"Volumen 35, página 29, corresponde a un
"precedente de esta tesis, sin embargo, de su
"contenido se desprende que es un criterio relativo
"al mismo tema, pero con un tratamiento diverso,
"por lo que en este registro se coloca bajo la
"leyenda "Véase"".**

ORTE OM
NA TOM
JERDOS PL
4-5714

En otro orden de ideas, debe establecerse que los Decretos 43, 44 y 49 combatidos, son de naturaleza autoaplicativa, en razón a que desde la iniciación de su vigencia, identifica a los sujetos que están obligados al pago del impuesto predial y por consiguiente, dichos sujetos se ven obligados a cubrir tal gravamen, sin que puedan omitirlo, en virtud de que con la entrada en vigencia de dicha ley, nace para tales contribuyentes la obligación fiscal respectiva, que es independiente de los actos posteriores que realicen las autoridades exactoras.

Ciertamente, es conveniente precisar cuando nace una obligación fiscal y así tenemos dos momentos, a saber:

1.- El nacimiento de la obligación, que únicamente requiere que la ley que la contiene, entre en vigor, y por lo tanto, desde ese momento no se puede evitar el pago o cumplimiento con una obligación de hacer o no hacer, ya que de omitir la conducta perceptuada en la norma, el contribuyente, incurriría en incumplimiento de la misma.

2.- El otro momento, se refiere a una cuestión completamente distinta, que es el acto posterior de autoridad, que exige el cumplimiento de dicha obligación, que en este caso, es el cobro del impuesto predial, a través de los mecanismos que la propia ley establezca sobre el particular.

En efecto, el acto que realiza la autoridad no tiene otra injerencia que conseguir que se cumpla con la obligación que ya se le impuso al contribuyente.

Por tanto, con los decretos impugnados en esta vía de amparo, los habitantes del Estado de México, se ven obligados a cubrir el impuesto predial de sus bienes inmuebles, desde el momento en que los Decretos controvertidos entraron en vigor, ya que si incumplieran el pago de tal gravamen, no podrían alegar en su favor que fue con motivo de que ninguna autoridad le ha requerido el pago de este.



AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.

De ahí en que se insista que tales Decretos tienen el carácter de autoaplicativos.

En esas condiciones, resulta infundado el motivo de improcedencia que propone la disconforme en su pliego relativo.

Por otra parte, debe desestimarse el segundo agravio que propone la recurrente, en el que alega que la parte quejosa, no acreditó su interés jurídico en el presente juicio, y por ende, debe de aplicarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:



FORTE DE
A. J. J. J. J.
ACUERDOS DE
LA SALA

**"Artículo 73.- El juicio de amparo es
"improcedente: FRACCIÓN V.- Contra actos que
"no afecten los intereses jurídicos del quejoso."**

Ciertamente, es infundado el motivo de improcedencia que aduce la recurrente, ya que contrariamente a lo que sustenta, las peticionarias de amparo, si acreditaron con los medios de convicción idóneos encontrarse bajo los supuestos de los Decretos impugnados, y consecuentemente, su interés jurídico para impetrar el presente juicio de garantías.

En efecto, la parte quejosa, exhibió junto con su demanda inicial los recibos de pago con números de folio 1311909, 1311908, 1315622, 153345, 154260 y 154929, expedidos por las Tesorerías Municipales de los Ayuntamientos Constitucionales de Tlalnepantla de Baz y Ecatepec de Morelos, Estado de México,

respectivamente, documentales públicas que son suficientes para acreditar su interés jurídico.

Lo anterior es así, en virtud de que con motivo de dichos pagos, las promoventes, acreditaron ubicarse dentro de los supuestos normativos de los Decretos en cuestión, y obviamente dicha situación le causa afectación a su esfera jurídica, en atención a que dicho pago se llevo a cabo para cumplir con la obligación fiscal estipulada en la ley que impugnan.

En esa tesitura, es infundado el agravio que se analiza, en virtud de que las quejas, si demostraron la afectación a su interés jurídico en esta vía constitucional.

SEXTO.- Puntualizado lo anterior, esta Primera Sala, procede al análisis de los agravios que combaten el fondo de la sentencia que se revisa, los que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se estudian en su conjunto a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

En el agravio señalado con el número tres aduce la LIII Legislatura del Estado de México, que la ley impugnada, no es inconstitucional, en virtud de que los ordenamientos en materia de catastro, permiten la modernización del sistema catastral, a través de un procedimiento que respeta las garantías de equidad y proporcionalidad en materia inmobiliaria, permite a los Ayuntamientos la operación del catastro en lo relativo al registro, identificación y localización de inmuebles.

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Señala la inconforme, que la Ley del Catastro, establece un sistema de catastro que permite valorar adecuadamente las áreas catastrales, considerando en todo momento su uso, clase, particularidades físicas y el entorno urbano en que se sitúan, a efecto de garantizar la satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad.

Alega la autoridad responsable, que la Ley del Catastro del Estado de México, no es inconstitucional en virtud de que para fijar las distintas áreas sobre las cuales se cobra dicho gravamen, se toman en consideración y como referencia los valores de mercado del suelo y de la construcción, por lo cual no se deja al arbitrio de la autoridad catastral la aplicación de la base para la determinación del impuesto predial, ya que está perfectamente definida, por los propietarios o poseedores de inmuebles al sujetarse a lo dispuesto por la ley impugnada.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de México, alega que la ley que se reclama no es inconstitucional, en razón de que en ella se contienen todos los elementos esenciales de los tributos, con lo que el contribuyente conoce de forma cierta, la manera en que debe de cumplir con la obligación fiscal correspondiente.

Asimismo, esgrime la recurrente, que la determinación de las áreas de interés catastral para cumplir con la obligación fiscal, no se efectúa a capricho de la autoridad administrativa, ya que es el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, a quien le corresponde llevar a

cabo un estudio con tecnología adecuada para la determinación de las áreas catastrales.

Son inoperantes por una parte, y por la otra, infundados los agravios aducidos por las autoridades recurrentes, para revocar la sentencia controvertida.

Ciertamente, resultan inoperantes los agravios que exponen las inconformes, en los que alegan:

Que para el cobro del impuesto predial se aplican las reglas y tablas previstas en los artículos 3 y 4, de la Ley en cita;

Que las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción, aprobadas por la LIII Legislatura Local, así como lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 1998; la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, no se podría definir todas y cada una de las áreas urbanas de interés catastral; por eso existe el catastro y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, auxiliar de las autoridades fiscales para efectos del impuesto predial, quien determina los valores catastrales de las fincas de la entidad.

Que el artículo 3º; de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, únicamente regula la base del impuesto predial; el artículo 1, el objeto, que es la propiedad o posesión de predios y las construcciones permanentes adheridas a ellos, que

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



se ubiquen dentro del territorio del municipio; el artículo 2, establece quienes son los sujetos el artículo 4, decreta como se determina el impuesto predial; el artículo 18, del multicitado dispositivo fiscal estatal, estatuye la época de pago, que ésta es anual en una exhibición, cuando su importe sea hasta de tres días de salario mínimo general de la zona económica correspondiente a la ubicación del inmueble; cuando su importe sea mayor a tres días y hasta seis días de salario mínimo, su pago se hará en dos exhibiciones; cuando exceda de seis días de salario mínimo general, su pago se dividirá en seis partes iguales, que se cubrirán bimestralmente en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

FE DE
LICION
DOS P
4241

Que en el artículo 19, se determina la obligación de los contribuyentes, de calcular el impuesto predial a su cargo; además, en el artículo 4 Bis, se regulan las exenciones; en los artículos 9 y 13, se decretan las modificaciones a las bases; en los artículos 25 Bis, regulan las manifestaciones y avisos; además de que en el interés catastral, y si bien el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, determina cada una de aquellas, lo hace atendiendo al procedimiento catastral, con la tecnología adecuada y no arbitrariamente.

Que el contribuyente del Impuesto Predial, tiene la obligación de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, de calcular el impuesto predial a su cargo, entendiéndose como acto de buena

fe; es decir, se está frente a la presencia de un impuesto auto declarativo, o autoliquidable.

Que la determinación de los valores catastrales se da mediante procedimientos técnicos y se definen en el territorio del Estado y por cada Municipio, las áreas urbanas de interés catastral, las áreas homogéneas, las bandas de valor y los valores unitarios de suelo y de construcción, se encuentran en las Tablas de Valor Por otra parte, se eliminó el concepto de categoría reduciéndose de 88 valores unitarios a 46; además, se disminuyeron los valores unitarios tanto de suelo como de construcción en un 25%, el artículo 15 de este ordenamiento señala que el Sistema de Valuación Catastral del Estado de México, tiene como base, las características predominantes en una circunscripción territorial, y tomará como referencia los valores de mercado del suelo y de la construcción, por lo cual no se deja al arbitrio de la autoridad catastral la aplicación de la base para la determinación del impuesto predial; y

Que aunado a lo anterior, el registro, identificación, localización y control de los inmuebles se hace mediante la asignación de una clave catastral que consiste en un Código alfa numérico de 16 posiciones la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio 1998, en su artículo 1º establece que la Ley de Hacienda Pública de los Municipios del Estado, percibirá durante el ejercicio fiscal de 1998, los ingresos provenientes de impuestos, entre los que se encuentran el impuesto predial.

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Esto es así, en atención a que se trata de argumentos novedosos que no fueron abordados en la sentencia que se revisa, por lo que esta Primera Sala está imposibilitada para hacer pronunciamiento expreso.

De ahí que surja la notoria inoperancia de dichos razonamientos, dado que con esas circunstancias ajenas no se desvirtúa la legalidad del fallo sujeto a revisión.

Encuentra fundamento la anterior conclusión, en la siguiente jurisprudencia:



ORTE DE
INACON
QUERÉTARO
REACT

Tesis jurisprudencial
Octava Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Apéndice de 1995
Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
Tesis: 32
Página: 21

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES
"CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR
"CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE
"FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.
"Cuando lo que se ataca, mediante los agravios
"expresados, constituyen aspectos que no fueron
"abordados en la sentencia recurrida para
"sobreseer en el juicio, otorgar o negar la
"protección constitucional, deben desestimarse
"tales agravios por inoperantes, puesto que no se
"desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos

*"de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y
"se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76
"bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá
"suplirse la deficiencia de la queja."*

"Octava Época:

*"Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de
"Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos.*

*"Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago
"Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos.*

*"Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S. A. 21
"de noviembre de 1988. Cinco votos.*

*"Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría
"Administrativa, S. C. 12 de junio de 1989. Cinco
"votos.*

*"Amparo en revisión 6882/90. Operadora El
"Presidente Las Palmas, S. A. de C. V. 11 de marzo
"de 1991. Unanimidad de cuatro votos.*

"NOTA:

*"Tesis 3a./J.16/91, Gaceta número 40, pág. 13;
"Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-
"Abril, pág. 24."*

Por otra parte, son infundados los agravios que propone la disconforme, porque, contrariamente a lo que sostiene, los Decretos combatidos son inconstitucionales.

Ciertamente, en primer lugar, independientemente de que la determinación de las áreas de interés catastral se realice adecuadamente con estudios científicos y tecnología adecuada, la litis en el presente juicio de amparo, se centra en el hecho de

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



El contenido de la ley impugnada, presenta dos vicios de inconstitucionalidad, a saber:

El primero de ellos, es que la Ley del Catastro del Estado de México, no señala cual es la base sobre la cual se va a gravar al particular, es decir, en el momento de su entrada en vigor, el contribuyente, no tiene la certeza ni el conocimiento de cual es la cantidad de dinero que deberá de cubrir por concepto de impuesto predial, ya que dicha tarifa está sujeta a un acto posterior de autoridad, situación que lo deja en incertidumbre en relación al monto que debe de cubrir.



En efecto, el artículo 3° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, dispone:

CORTE DE
LA NACION
ACUERDO
DE 1997

"ARTÍCULO 3°.- Será base para la determinación del impuesto predial I.- Tratándose de inmuebles ubicados dentro de las áreas urbanas de interés catastral, el valor catastral.- - II.- El monto pagado en el ejercicio anterior por concepto de este impuesto, en el caso de inmuebles ubicados fuera de las áreas de interés catastral; y III.- Para los inmuebles ubicados fuera de las áreas urbanas de interés catastral, cuya obligación de pago se genere por primera vez, la superficie de terreno y de construcción, si la hubiere."

Del análisis del artículo anterior, se advierte que para realizar el pago del impuesto predial, el contribuyente, debe de

saber en que hipótesis se localiza, por lo que es necesario determinar que se entiende por una área de interés catastral.

Al respecto, el artículo 16 de la Ley del Catastro del Estado de México, preceptúa:

**"ARTÍCULO 16.- Para efectos de la presente ley,
"el área urbana de interés catastral es aquella
"delimitación territorial, con o sin traza urbana,
"definida por las autoridades catastrales dentro
"del territorio de un municipio."**

De acuerdo al precepto arriba transcrito, se desprende que las áreas sobre las cuales el contribuyente, cubrirá su obligación no se encuentra determinada y en consecuencia no se localiza en el texto de este cuerpo normativo la base que sobre las mismas se grava al contribuyente.

A mayor abundamiento, el artículo 16 de la Ley del Catastro del Estado de México, supedita la determinación de la base gravable a un acto posterior de autoridad.

En las condiciones relatadas, al no expresarse cuál es la base gravable del cobro del impuesto predial, la ley en comento viola en perjuicio de las quejas, el principio de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción, IV Constitucional, en virtud de que las deja en una situación de incertidumbre jurídica.

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



Ciertamente, en virtud de que la garantía de legalidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no se limita a señalar que para considerar constitucionalmente válida una contribución, únicamente se exprese en una ley; sea proporcional y equitativa y sea destinada al gasto público, sino que, también requiere que los elementos esenciales del tributo se encuentren contenidas en la misma, como lo son sujeto, objeto, base o tarifa, época de pago, etc.

Lo anterior es así, para evitar que quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras y así evitar el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no le quede otra cosa que aplicar las disposiciones de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria conozca con toda certeza de forma cierta la manera en que debe de contribuir para los gastos de la Federación, del Estado o del Municipio en que reside; de lo contrario, se viola la garantía supranombrada, en razón de que el causante, no conoce con certeza cual es la cantidad que debe de pagar y por otra parte, dicha cantidad se determina por un acto posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Cobra plena aplicación, la siguiente jurisprudencia:

Tesis jurisprudencial
Séptima Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice de 1995
Tomo: Tomo I, Parte SCJN
Tesis: 162

Página: 165

**"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS.
 "DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE
 "EN LA LEY. Al disponer el artículo 31
 "constitucional, en su fracción IV, que son
 "obligaciones de los mexicanos "contribuir para
 "los gastos públicos, así de la Federación como del
 "Estado y Municipio en que residan, de la manera
 "proporcional y equitativa que dispongan las
 "leyes", no sólo establece que para la validez
 "constitucional de un tributo es necesario que,
 "primero, esté establecido por ley; segundo, sea
 "proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado
 "al pago de los gastos públicos, sino que también,
 "exige que los elementos esenciales del mismo,
 "como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y
 "época de pago, estén consignados de manera
 "expresa en la ley, para que así no quede margen
 "para la arbitrariedad de las autoridades exactoras,
 "ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a
 "título particular, sino que a la autoridad no quede
 "otra cosa que aplicar las disposiciones generales
 "de observancia obligatoria dictadas con
 "anterioridad al caso concreto de cada causante y
 "el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en
 "todo momento conocer la forma cierta de
 "contribuir para los gastos públicos de la**

SECRETARÍA DE JUSTICIA
 Y FERIA

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



**"Federación, del Estado o Municipio en que
"resida."**

"Séptima Época:

**"Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de
"González. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de
"quince votos.**

**"Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez
"Treviño. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de
"quince votos.**

**"Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S.
"A. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de quince
"votos.**

**"Amparo en revisión 331/76. María de los Angeles
"Prendes de Vera. 3 de agosto de 1976. Unanimidad
"de quince votos.**

**"Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández
"Abarca. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de
"quince votos."**

ORTE DE
. NACIÓN
JERDOS DE
(1974)

En segundo término, es inconstitucional el cuerpo normativo impugnado, en virtud de que, como ya se precisó, el artículo 16 de la Ley del Catastro del Estado de México, deja al arbitrio de la autoridad administrativa, determinar las áreas sobre las cuales se fijará la base para el cobro del impuesto predial, situación que viola el principio de legalidad tributaria, establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que cualquier autoridad que tenga a su cargo la determinación de un impuesto, y que sea distinta al legislador, viola la garantía de legalidad tributaria con antelación mencionada.

Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis aislada que dice:

Tesis aislada

Octava Época

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VIII-Noviembre

Tesis: 4a. XXXVI/91

Página: 69

**"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN
"MATERIA DE. La exigencia de que los elementos
"esenciales de un tributo se consignan
"expresamente en la ley que lo establece, no llega
"al extremo de pretender la definición de los
"conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de
"que la norma se interprete para averiguar su
"correcto alcance. Lo que prohíbe la fracción IV del
"artículo 31 de la Constitución Federal, es que la
"creación propiamente dicha del impuesto quede a
"cargo de una autoridad distinta del legislador, lo
"cual no acontece cuando en la ley aparecen
"determinados los elementos del tributo,
"requiriéndose únicamente de la interpretación
"para fijar su exacto sentido, puesto que interpretar
"la ley no equivale a crearla, sino nada mas a
"desentrañar el sentido de la ya existente."**

**"Amparo en revisión 827/91. Grupo Editorial Sefi,
"S.A. de C.V. 14 de octubre de 1991. Cinco votos.
"Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario:
"Abraham S. Marcos Valdés."**

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



A mayor abundamiento, con la facultad que el artículo 16, de la Ley del Catastro del Estado de México, concede al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (artículo 2° de la Ley del Catastro del Estado de México), en el sentido de poder determinar cuál será la base gravable que el contribuyente, tiene que cubrir el impuesto predial, provoca incertidumbre e inseguridad para el causante, quien desconoce cuanto tendrá que pagar por ese gravamen, es decir, dicho artículo orilla que las autoridades administrativas, con posterioridad al establecimiento del impuesto, intervengan en la determinación de la base en tanto que pueden modificar los valores catastrales de los inmuebles.

En esas condiciones, si a la entrada en vigor o con posterioridad al establecimiento del impuesto, las autoridades administrativas tienen la posibilidad de determinar el valor catastral, que constituye la base del tributo, es evidente que uno de los elementos esenciales del impuesto no queda determinado en la ley, ya que los contribuyentes no tienen la posibilidad de conocer de manera precisa la forma en que deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, pues en cualquier momento, la base de tributación puede ser modificada al arbitrio de las propias autoridades administrativas, situación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado inconstitucional.

Es aplicable, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial que dice:

Tesis jurisprudencial

Octava Época

Instancia: Pleno

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 76, Abril de 1994

Tesis: P./J. 8/94

Página: 14

"RADICACIÓN, IMPUESTO SOBRE. EL ARTÍCULO
"83 BIS-H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
"DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE EN 1993,
"VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
"CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV,
"DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de
"legalidad tributaria exige que las contribuciones
"para sufragar los gastos públicos de la
"Federación, Estados y Municipios, deben estar
"establecidas por la ley en sentido formal y
"material; esto significa que la ley que establece el
"tributo debe definir los elementos y supuestos de
"la obligación tributaria, entre ellos, la cuota o
"tarifa. Ahora bien, el Decreto 152, expedido por la
"legislatura del Estado de México, el veintitrés de
"diciembre de mil novecientos noventa y dos,
"adicionó a la Ley de Hacienda Municipal del
"Estado de México, concretamente con el artículo
"83 BIS-H, viola ese principio, al dejar al arbitrio del
"Instituto de Información e Investigación
"Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
"México la determinación de uno de los elementos

AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.



"de la cuota de ese tributo. Por tanto, aun cuando
 "la ley de manera abstracta señala algunos de los
 "elementos que integran la cuota del impuesto
 "controvertido, resulta inadmisibile que la propia
 "ley faculte a una autoridad fiscal para la fijación
 "de uno de los elementos de la cuota del gravamen.
 "Por consiguiente, el artículo mencionado en
 "cuanto faculta al expresado Instituto a determinar
 "los sectores catastrales, es inconstitucional."

"Amparo en revisión 1172/93. Gimbel Mexicana,
 "S.A. de C.V. 9 de marzo de 1994. Mayoría de veinte
 "votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario:
 "Miguel Angel Cruz Hernández."

"Amparo en revisión 1108/93. Alimentos
 "Industriales, S.A. de C.V. 9 de marzo de 1994.
 "Mayoría de veinte votos. Ponente: Victoria Adato
 "Green. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández."

"Amparo en revisión 1309/93. Transportes Ballena,
 "S.A. de C.V. 9 de marzo de 1994. Mayoría de veinte
 "votos. Ponente: Luis Fernández Doblado.
 "Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández."

"Amparo en revisión 1540/93. Bocar, S.A. de C.V. 9
 "de marzo de 1994. Mayoría de veinte votos.
 "Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretaria:
 "Norma Lucía Piña Hernández."

"Amparo en revisión 1039/93. Envases Cuevas,
 "S.A. de C.V. 9 de marzo de 1994. Mayoría de veinte
 "votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria:
 "Adriana Campuzano de Ortiz."

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada
 "el martes quince de marzo en curso, por
 "unanimidad de veintiún votos de los señores
 "Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez,

*"Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas,
"José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes
"García, Carlos Sempé Minvielle, Noé Castañón
"León, Felipe López Contreras, Luis Fernández
"Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria
"Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés
"Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester,
"Atanasio González Martínez, José Manuel
"Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos
"García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan
"Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez:
"aprobó, con el número 8/1994, la tesis de
"jurisprudencia que antecede; y determinó que las
"votaciones de los precedentes son idóneas para
"integrarla. México, Distrito Federal, a dieciocho de
"marzo de mil novecientos noventa y cuatro."*

En las relatadas circunstancias, al ser infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades recurrentes, lo procedente es confirmar la sentencia en estudio y conceder la protección solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia que se revisa.

SEGUNDO.- Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión ampara y protege a las quejas RESIDENCIAS MODERNAS, S.A. DE C.V., ARRENDADORA DE ARAGÓN, S.A. DE C.V., PROMOTORA DE INVERSIONES VALLE DORADO, S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS METROPOL, S.A. DE C.V., contra las autoridades y por los actos que se precisan en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida.



AMPARO EN REVISIÓN 2479/98.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza, Ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.

Firman el Presidente de la Sala y la Ministra Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

OFICIO DE
ANEXO
CARTA
A S.

EL PRESIDENTE:

JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

PONENTE:

OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA:

MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

Esta hoja forma parte del amparo en revisión número 2479/98, promovido por RESIDENCIAS MODERNAS, S.A. DE

V